



Las cambiantes dinámicas del crimen organizado en América Latina.¹

Croci, Gonzalo

Universidad ORT Uruguay

Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia

Larroca, Maité

Universidad ORT Uruguay

Gómez, Joel

Universidad ORT Uruguay

Junio 2025

Abstract

El crimen organizado no es un fenómeno nuevo en América Latina. No obstante, en los últimos años, la región experimentó un incremento significativo en las tasas de homicidio, afectando incluso a países que tradicionalmente se consideraban seguros, como Argentina, Costa Rica, Ecuador y Uruguay. En particular, estos países registraron un importante aumento en los homicidios vinculados al crimen organizado. Por ejemplo, en Ecuador, la tasa de homicidios incrementó en un 429% entre 2019 y 2024, impulsada principalmente por la violencia asociada al narcotráfico. En Uruguay, el 56% de los homicidios ocurridos entre 2012 y 2022 estuvieron relacionados con disputas entre grupos criminales. Más allá de los desafíos en materia de seguridad, el crimen organizado debilita la gobernabilidad, obstaculiza el desarrollo económico y socava la democracia. Este estudio analiza tres hipótesis que buscan explicar la expansión de la violencia relacionada al crimen organizado en la América Latina: (1) la proliferación de organizaciones criminales transnacionales en la región y la fragmentación de los grupos criminales locales; (2) las deficiencias en la gobernanza, manifestadas en instituciones débiles, corruptas o ineficaces; y (3) la transformación de las rutas del narcotráfico y el auge de mercados ilegales locales.

Palabras clave: Crimen organizado, mercados ilegales, debilidad institucional.

Documento de Investigación, Nro.150, junio 2025. Universidad ORT Uruguay.

Facultad de Administración y Ciencias Sociales. ISSN 1688-6275.

¹ Una primera versión de este trabajo fue publicada en: Croci, G., Dammert, L. and Larroca, M. (2025). From Safe Havens to Hotspots: The Spread of Organised Crime Violence in Latin America. The Palgrave Handbook of Criminology and the Global South, 2nd edition.

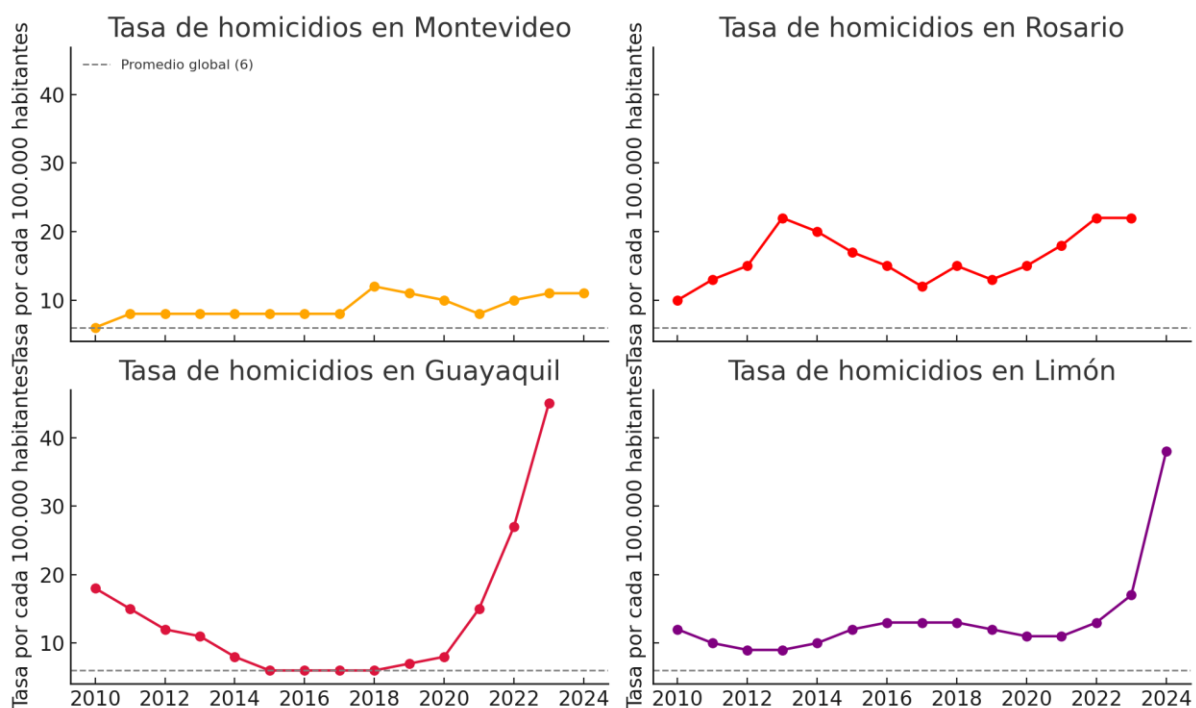
1. Introducción

La presencia del crimen organizado² en América Latina no es un fenómeno reciente. Sin embargo, en los últimos años, la violencia homicida ha dejado de estar circunscrita a unos pocos países para extenderse, con diferentes niveles de intensidad, a toda la región. Incluso países tradicionalmente considerados seguros, como Ecuador, Costa Rica y Uruguay, han experimentado incrementos significativos en sus tasas de homicidios vinculados al crimen organizado. Por ejemplo, en 2023, Ecuador registró la tasa de homicidios más alta de América Continental, pasando de 25,5 en 2022 a 44,5 por cada 100.000 habitantes (Human Rights Watch, 2025), impulsada principalmente por la violencia asociada al narcotráfico (UNODC, 2023a). De manera similar, en Uruguay, datos recientes indican que el 56% de los homicidios ocurridos entre 2012 y 2022 estuvieron relacionados con conflictos entre grupos delictivos³ (Rojido, Cano y Borges, 2023). El incremento de la violencia y las tasas de homicidio en ciudades como Rosario (Argentina), Antofagasta (Chile), Guayaquil (Ecuador) y Limón (Costa Rica) parecería estar estrechamente vinculado a los enfrentamientos entre organizaciones criminales regionales e internacionales que disputan el control de zonas estratégicas (ver figura 1). Estos grupos compiten por el control de puertos, áreas económicas y regiones fronterizas que se han transformado en puntos centrales para la actividad de los mercados ilegales. Consecuentemente, las disputas territoriales se han convertido en un factor determinante en el aumento de la violencia, ya que estas redes criminales buscan influir en áreas críticas para el tráfico de drogas y otras operaciones ilegales (Farah, 2024).

² El término “crimen organizado” es el concepto más debatido dentro de la criminología contemporánea (Santorso & Rizzuti, 2024). Esta controversia generó una variedad de definiciones, muchas veces divergentes, que reflejan distintas perspectivas teóricas y contextuales (Finckenauer, 2005; Reuter y Paoli, 2020). En este trabajo, se adopta —de manera arbitraria— la definición propuesta por Varese (2017), que describe al crimen organizado como grupos que buscan ejercer control sobre la producción y distribución de bienes o servicios mediante mecanismos ilegales.

³ Existen críticas a esta clasificación. Para más información ver: Rojido, E., Cano, I., & Borges, D. (2024). Tipología de los homicidios en Uruguay.

Figura 1: Comparación de las tasas de en ciudades seleccionadas

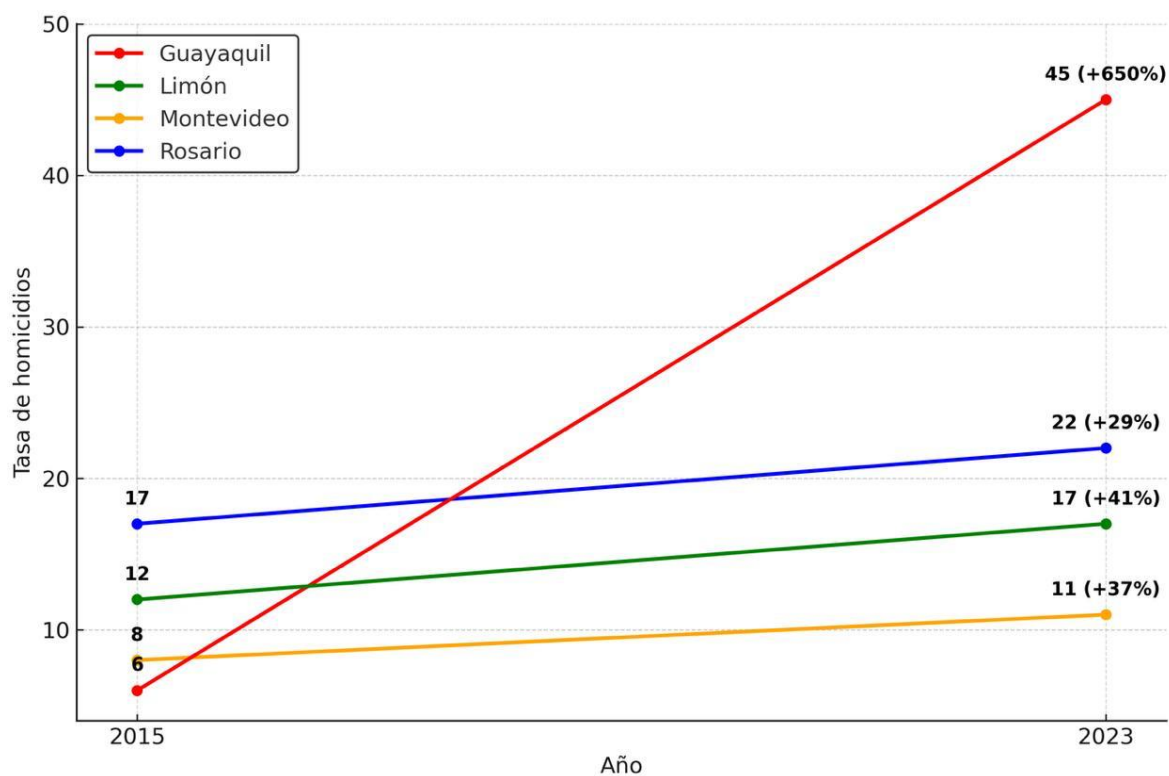


Fuente: elaboración propia con datos de Homicide Monitor (2025).

Este artículo propone tres hipótesis para explicar la dinámica del crimen organizado y su impacto en la violencia en América Latina. En primer lugar, se analiza la creciente influencia de los grupos criminales transnacionales y la fragmentación de las bandas locales (Sergi, 2019; Catino, 2020; EMCDDA y EUROPOL, 2022). En segundo lugar, se examina el papel que desempeña la debilidad o ausencia de las instituciones, las cuales generan un entorno favorable para el desarrollo del crimen organizado la delincuencia organizada (Levitsky y Murillo, 2013; Nivette y Eisner, 2013; Müller, 2018; Croci y Chainey, 2022). Finalmente, se estudian las transformaciones en las rutas de suministro ilícito, especialmente hacia los mercados europeos y norteamericanos, así como el incremento del consumo en los mercados locales ilegales, particularmente en relación con las drogas (GI-TOC, 2023a; EUROPOL, 2023). Para evaluar estas hipótesis, la investigación adopta un enfoque comparativo basado en estudios de caso en Guayaquil (Ecuador), Limón (Costa Rica), Rosario (Argentina) y Montevideo (Uruguay) (ver figura 2). Este enfoque permite comprender cómo el crimen organizado se adapta y evoluciona en distintos contextos sociales, económicos e institucionales. Esta investigación aborda un vacío en la literatura al analizar los mecanismos subyacentes que facilitan la proliferación de la violencia asociada al crimen organizado en América Latina, especialmente en contextos donde ese aumento de violencia ha ocurrido en países previamente considerados seguros. Mientras que

numerosos estudios se han centrado en el crimen organizado en países con altos índices de violencia, como México, Colombia o Brasil, existe una notable carencia de investigaciones que examinen países con entornos tradicionalmente menos violentos, donde dinámicas particulares favorecen la expansión de estas organizaciones. Al focalizarse en la interacción entre las redes delictivas, las debilidades institucionales y la evolución de los mercados ilegales, este estudio ofrece una perspectiva integral sobre cómo el crimen organizado se adapta y prospera en diversos contextos. De este modo, contribuye al avance del debate teórico acerca de los factores que impulsan la expansión y consolidación del crimen organizado en la región.

Figura 2: Gráfico lineal de la variación de la tasa de homicidios en ciudades seleccionadas (2015-2023).



Fuente: elaboración propia con datos de Homicide Monitor (2025).

2. Revisión de literatura

2.1. Fragmentación y presencia transnacional de grupos criminales

La primera hipótesis se enfoca en cómo las redes criminales transnacionales operan en contextos locales marcados por una creciente fragmentación. Distintos estudios han documentado cambios en la estructura y el funcionamiento del crimen organizado a nivel local, mostrando que estas redes se caracterizan por una combinación de fragmentación interna y vínculos estratégicos entre grupos

(EMCDDA y EUROPOL, 2022). Estas organizaciones no sólo coordinan el tráfico ilícito, sino que también subcontratan servicios, comparten rutas de contrabando y recursos, configurando así una compleja red de cooperación. Por ejemplo, grupos internacionales como la mafia albanesa y la 'Ndrangheta establecieron alianzas con organizaciones latinoamericanas, incluyendo cárteles como Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como con grupos locales de menor escala (Sergi, 2019; Catino, 2020; OECO, 2023a).

En México, la fragmentación de las organizaciones criminales intensificó tanto la competencia como la violencia. El número de grupos identificados se duplicó, pasando de 98 en 2010 a 198 en 2019. Esta red criminal compleja incluye al menos 37 cárteles reconocidos, muchos de los cuales son facciones derivadas de organizaciones mayores, junto con al menos 135 grupos que operan como células dentro de esos cárteles principales (Esberg, 2020). De manera similar, en Rosario (Argentina), el clan de Los Monos, que anteriormente ejercía un control predominante, se dividió en facciones rivales, desencadenando una escalada de violencia intra grupal (La Capital, 2025). En Puerto Príncipe (Haití), existen más de 100 bandas criminales vinculadas a diversos mercados ilegales (Walker, 2022). Además, en un contexto en el que América Latina tiene la mayor proporción mundial de homicidios relacionados con armas de fuego, la proliferación de armas agrava dicha dinámica (Sanjurjo, 2020; UNODC, 2023a). Estos entornos letales subrayan el papel de la violencia como herramienta para resolver disputas, hacer cumplir acuerdos y mantener el control sobre los mercados ilegales (Gambetta, 1993; von Lampe, 2015).

2.2 Fallos institucionales y vacíos de gobernanza

Un segundo marco hipotético destaca el papel que desempeñan las instituciones públicas, muchas veces inefectivas, ausentes y corruptas, en la creación de entornos propicios para la expansión del crimen organizado. La ineficacia institucional se manifiesta en diversas dimensiones, tales como la deficiente aplicación de la ley, la lentitud y falta de efectividad de los sistemas judiciales, así como, la incapacidad de los gobiernos para adaptarse a las cambiantes dinámicas delictivas (Levitsky y Murillo, 2013; Müller, 2018; Croci, 2023). Por ejemplo, las prisiones, frecuentemente mal gestionadas, funcionan más como centros de expansión y consolidación de redes criminales que como espacios de disuasión (Skarbek, 2016; Bergman y Fondevila, 2021).

El concepto de “gobernanza criminal” ayuda a comprender cómo el crimen organizado aprovecha las debilidades estatales para asumir funciones cuasi gubernamentales, tales como la provisión de servicios, la imposición del orden y la regulación de actividades económicas y sociales (Lessing, 2020). En contextos donde la presencia estatal es limitada o ausente, como ocurre en las favelas de Río de Janeiro, estos grupos regulan las realidades políticas, sociales y económicas locales (Arias y Barnes,

2017). Asimismo, la corrupción dentro del aparato estatal genera relaciones simbióticas con el crimen organizado, contribuyendo a la estabilidad de los mercados ilícitos a costa de la seguridad pública y la legitimidad institucional (Skarpedas, 2001; Paoli, 2014).

2.3. Cambios en las rutas de suministro y expansión del consumo local

La tercera hipótesis analiza cómo las transformaciones en las rutas de tráfico ilícito y la expansión de los mercados locales de consumo contribuyen al aumento de la violencia. Algunos países Latinoamericanos, han mejorado su infraestructura de transporte, la cual acoplada con controles fronterizos débiles, consolidó a la región como un punto de tránsito para las rutas de cocaína hacia Europa; un mercado valorado en aproximadamente 12.800 millones de euros. Paralelamente, los mercados ilegales locales experimentaron un crecimiento, abarcando no solo drogas, sino también otros mercados ilegales, como las armas y el contrabando. En particular, según datos de la UNODC, el consumo de cocaína en Sudamérica se ha más que duplicado en la última década, alcanzando los 4,7 millones de consumidores en 2020. Países como Brasil, Uruguay, Ecuador y Argentina —que se encuentran entre los principales países de tránsito hacia Europa— reportaron niveles especialmente elevados de consumo, mientras que otras naciones, como Chile, muestran tendencias similares de creciente consumo (UNODC, 2023a). Paralelamente, el consumo de drogas sintéticas creció sustancialmente. Entre los primeros registros y los años más recientes, varios países de la región evidenciaron incrementos significativos en la prevalencia del consumo de éxtasis. En consecuencia, por ejemplo, Argentina registró un aumento en el consumo de cocaína pasando del 0,73% en 2011 al 1,67% en 2017 (lo que equivale a aproximadamente 739.000 consumidores), y en el consumo de éxtasis desde el 0,10% al 0,33% (alrededor de 146.000 consumidores). Estas tendencias reflejan un patrón regional más amplio de incremento en el consumo de estimulantes durante la última década (UNODC, 2025).

La expansión de los mercados locales no solo diversifica las actividades de los grupos criminales, sino que también contribuye a la intensificación de la violencia. Por ejemplo, las organizaciones involucradas en el tráfico de cocaína extendieron sus operaciones a actividades como la minería ilegal y la extorsión, empleando con frecuencia la violencia para consolidar y mantener el control territorial. Este fenómeno, conocido como mercados ilegales convergentes, se refiere a la interconexión de diversas actividades ilícitas que suelen ser facilitadas por redes criminales que comparten recursos, infraestructuras y rutas logísticas. Así, una misma ruta utilizada para el tráfico de cocaína puede también servir para el contrabando de migrantes o de oro, lo que permite a distintas organizaciones delictivas operar de manera sinérgica, incrementando sus ganancias y reduciendo los riesgos operativos (UNODC, 2023b). En numerosos casos, la corrupción actúa como un mecanismo que mitiga

la violencia al estabilizar estos mercados ilícitos, tal como evidencian los acuerdos clientelistas entre grupos criminales e instituciones estatales en países como México, Honduras y Brasil (Snyder y Duran-Martinez, 2009; Adorno y Dias, 2019).

3. Datos y métodos

Seleccionados por dos razones fundamentales, los barrios son la principal unidad de análisis de esta investigación. En primer lugar, estos espacios ofrecen un nivel de detalle superior en los datos gubernamentales disponibles. En segundo lugar, los barrios son especialmente adecuados para el estudio de variables como el homicidio y la desigualdad, al proporcionar un contexto social significativo para la comparación, tal como señalan Messner y Tardiff (1986). Además, los barrios reflejan la vida urbana y los procesos de gobernanza, constituyéndose en un escenario privilegiado para el análisis de problemáticas sociales (Grafmeyer y Joseph, 1979).

Para abordar el fenómeno de la delincuencia organizada, se emplea un método de estudio de casos que permite un análisis profundo en cuatro contextos específicos: Rosario, Guayaquil, Limón y Montevideo, cada uno caracterizado por particularidades sociales, económicas e institucionales propias. Este enfoque cualitativo posibilita una exploración holística de fenómenos complejos, captando matices que podrían pasar desapercibidos con otros métodos, y ofreciendo perspectivas detalladas que enriquecen tanto el desarrollo teórico como las aplicaciones prácticas (Yin, 2018; Stake, 1995). Asimismo, el estudio de casos resulta especialmente útil para identificar los factores clave que impulsan el crimen organizado y la violencia, permitiendo poner a prueba hipótesis generales en entornos diversos y revelar variables contextuales que suelen escaparse a los métodos cuantitativos (Flyvbjerg, 2006).

Con el fin de garantizar una perspectiva integral, esta investigación integra múltiples fuentes de datos, combinando métodos cualitativos —como observaciones y análisis documental— con datos cuantitativos, incluyendo estadísticas de criminalidad e indicadores socioeconómicos. De esta manera, mediante la triangulación de datos, el estudio asegura una mayor validez y credibilidad en sus conclusiones, al confrontar información proveniente de distintas fuentes, minimizando sesgos y proporcionando una comprensión más robusta del problema investigado (Denzin, 2017).

4. Resultados

4.1. Montevideo: Crimen organizado emergente en una ciudad históricamente segura

La tasa de homicidios en Uruguay experimentó un aumento significativo, pasando de 6 por cada 100.000 habitantes en 2003 a 11 en 2024, lo que representa un incremento del 83,3%. Al igual que en otras ciudades, la violencia homicida se encuentra concentrada en determinadas áreas⁴. En Montevideo, la tasa es de 13,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, aunque esta cifra se eleva considerablemente en zonas específicas, como la Zona 3, con 28,1 homicidios, y la Zona 4, con 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. En particular, tres barrios concentran más del 30% del total de homicidios de la capital: La Paloma y Tomkinson (15,6%), Casavalle (9,5%), y Casabó y Pajas Blancas (5,2%), evidenciando una marcada concentración territorial de la violencia (Ministerio del Interior, 2024). Un informe reciente señala que el 56% de estos homicidios están vinculados a disputas entre grupos criminales involucrados en el narcotráfico y la distribución callejera de drogas (Rojido, Cano y Borges, 2023).

Diversos estudios han documentado la presencia y actividad de organizaciones criminales transnacionales en Uruguay, tales como el Primeiro Comando da Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y la 'Ndrangheta, las cuales se dedican principalmente al transporte de cocaína hacia Europa (EL PACCTO, 2025). Documentos policiales confirman la operación del PCC en departamentos fronterizos, donde colaboran con redes criminales locales que facilitan la logística para estos grupos transnacionales, utilizando a Uruguay como un punto estratégico de tránsito y acopio. En este contexto, Uruguay se consolidó como un centro para la recepción y distribución de cargamentos de cocaína con destino a Europa⁵, mientras que su mercado interno de drogas continúa en expansión. Por ejemplo, aunque la prevalencia del consumo de cocaína se mantuvo relativamente estable en torno al 2,10%, el número absoluto de usuarios sigue siendo significativo (alrededor de 72.000 en 2017), mientras que

⁴ La ley de concentración del delito, propuesta por Weisburd (2015), sostiene que una proporción muy pequeña del espacio urbano concentra una parte desproporcionadamente alta de los delitos. Específicamente, sus investigaciones revelan que entre el 3% y el 5% de las calles de una ciudad pueden concentrar hasta el 50% de los hechos delictivos. Esta regularidad empírica, observada en diferentes contextos internacionales, sugiere que el crimen no está distribuido de manera aleatoria ni homogénea, sino que se agrupa en ciertos lugares específicos.

⁵ Desde una perspectiva comercial, el tráfico de cocaína hacia Europa resulta considerablemente más lucrativo que hacia Estados Unidos. Esto se debe a que los precios de la cocaína en el mercado europeo son sustancialmente más elevados, mientras que los riesgos asociados a la interceptación, extradición y confiscación de bienes son relativamente menores. Por ejemplo, un kilogramo de cocaína puede venderse al por mayor por hasta 28.000 dólares en Estados Unidos, mientras que en Europa el mismo volumen alcanza un precio promedio cercano a los 40.000 dólares, llegando en algunas regiones a casi 80.000 dólares (McDermott et al., 2021).

el consumo de éxtasis aumentó considerablemente, pasando del 0,20% en 2011 al 0,90% en 2018 (ver figura 4). Esta situación tiene implicancias tanto para los flujos de droga como en la escalada de violencia en el país (Newton, 2024a).

La hidrovía Paraná-Paraguay adquirió relevancia como corredor fluvial que facilita el tráfico de estupefacientes en la región (UNODC, 2023a). De igual manera, hacia el sur, el puerto de Montevideo desempeña un papel cada vez más relevante en el transbordo de drogas ilícitas, beneficiándose de una infraestructura avanzada y una gran capacidad de carga (Sampó y Troncoso, 2022), haciendo que el puerto se convierta en un punto estratégico dentro del tráfico mundial de cocaína; en parte debido a una supervisión de seguridad relativamente débil. Tradicionalmente, las aduanas internacionales y las agencias de seguridad no consideran a Montevideo como un punto de entrada de alto riesgo, lo que lo convierte en un lugar atractivo para las organizaciones criminales (Sampó y Troncoso, 2022). Consecuentemente, según el Índice Global del Crimen Organizado (GOCI), la puntuación de Uruguay en relación con la variable “comercio de cocaína”⁶ aumentó de 5 a 6 puntos sobre 10 entre 2021 y 2023 (GI-TOC, 2023b). Por ejemplo, en 2022, las autoridades uruguayas incautaron un total de 4,5 toneladas de cocaína (Doherty y den Held, 2023). Sin embargo, la situación se vio agravada por diversos escándalos de corrupción en los últimos años, evidenciando fragilidad institucional, la negligencia de los servicios de seguridad y la ausencia de una supervisión eficaz (El País, 2022; Dalby, 2023; Newton, 2024b).

Tras un análisis detallado de la situación actual de Montevideo, el caso del barrio Casavalle merece especial atención. Ubicado en el norte de la ciudad, Casavalle está conformado por varios micro barrios, y fue sistemáticamente clasificado como uno de los barrios más violentos durante la última década, ocupando el primer o segundo lugar en cuanto a las tasas de homicidios. Este caso ejemplifica cómo la fragmentación de grupos criminales puede facilitar la proliferación de la violencia, sin la necesidad de que existan grandes organizaciones centralizadas. Esta ausencia de grupos criminales estructurados se traduce en niveles elevados de violencia debido al incremento en el número de competidores, siendo la violencia la herramienta principal en la disputa y mantenimiento del control territorial (CERES, 2024).

Varios estudios mostraron que la privación socioeconómica está asociada a un aumento en la incidencia delictiva (por ejemplo, Osborn y Tseloni, 1998). Esto se debe a que las condiciones de vida

⁶ La variable “comercio de cocaína” evalúa la producción, distribución y venta de cocaína y sus derivados. Aunque el consumo no se considera crimen organizado per se, se tiene en cuenta para determinar el alcance del mercado ilícito. Esta variable refleja la magnitud y sofisticación de las actividades relacionadas con la cocaína en un país, incluyendo su rol como productor, punto de tránsito o mercado de consumo. La puntuación asignada se basa en la presencia de redes criminales, rutas de tráfico, capacidad logística y la influencia de actores estatales o no estatales en la cadena de suministro.

y las características de los hogares influyen en qué tan accesibles y vulnerables son las personas o propiedades frente al delito (Tseloni, 2006). En este sentido, Casavalle es uno de los barrios más vulnerables de Montevideo, con una importante concentración de problemas socioeconómicos, como de vivienda, desempleo, empleo informal y dificultades en el acceso a servicios básicos, entre otros desafíos (Municipio D de Montevideo, 2019). En términos de privación habitacional, el barrio tiene valores que superan significativamente la media nacional, como en el nivel de hacinamiento, en los hogares sin acceso a saneamiento, y en las deficiencias en pisos y techos (Calvo, 2013). El hacinamiento residencial es comúnmente utilizado como un indicador central para identificar zonas desfavorecidas (Osborn y Tseloni, 1998). De igual manera, ha sido vinculado a problemas de salud mental; altos niveles de estrés; y relaciones sociales tensas, tanto dentro como fuera del hogar (Gove, Hughes y Galle, 1979; Ruiz-Tagle y Urria, 2021). Además, este afecta negativamente el rendimiento académico de los niños, incluso cuando se controlan por las condiciones socioeconómicas (Solari y Mare, 2012; Lopoo y London, 2016; Contreras, Delgadillo y Riveros, 2019), y se asocia con comportamientos agresivos y antisociales (Regoeczi, 2008; Makinde, Björkqvist y Österman, 2016). Entre las variables que componen las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)⁷, el hacinamiento es uno de los principales componentes del déficit habitacional (Calvo, 2013). En este sentido, Casavalle se posiciona como el barrio con mayor porcentaje de población con NBI en Montevideo, alcanzando un 60,1% de habitantes sin acceso a servicios esenciales (Echevarría et al., 2019). En el ámbito doméstico, la delincuencia relacionada con las drogas y las adicciones ha fragmentado los hogares, generando problemas dentro y fuera de las casas de familia (Pedrosián, 2013).

El porcentaje de madres adolescentes en Casavalle es el más alto de Montevideo (17,1 %). Particularmente, dentro del barrio, un 13,5% de todas las madres tienen entre 15 y 19 años, conformando el mayor grupo de madres en la población del barrio por rango etario. En comparación, Punta Carretas (un barrio de altos ingresos) tiene un 4,8 % de madres en ese mismo rango de edad (Calvo, 2013). Una alta tasa de madres adolescentes está asociada a múltiples consecuencias negativas (Baba, Iso y Fujiwara, 2016), incluyendo un elevado riesgo de experimentar maltrato y abandono infantil (Thornberry et al., 2014). A su vez, las madres adolescentes tienen mayor probabilidad de interrumpir sus estudios y de obtener un rendimiento académico inferior (Kane et al., 2013). En este sentido, el nivel educativo promedio en Casavalle corresponde a la finalización de la educación

⁷ La metodología de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) constituye un enfoque directo y multidimensional para la medición de la pobreza. Este método identifica carencias en el acceso a bienes y servicios esenciales, así como deficiencias en la calidad de estos, que son fundamentales para garantizar el cumplimiento de los derechos sociales (Calvo, 2013).

primaria⁸, situándose por debajo de la media nacional. Solo el 13,6% de la población completo los estudios secundarios o superiores, en contraste con más del 78% registrado en barrios de altos ingresos. Además, únicamente el 4% de los habitantes de Casavalle alcanzó educación terciaria, mientras que el 49% concluyó únicamente la escuela primaria (MIDES y DESyTC, 2018). Por su parte, sus hijos también tienden a presentar peores resultados educativos, así como una menor satisfacción con la vida y menores ingresos personales; además de presentar mayores tasas de comportamiento disruptivo (D'Onofrio et al., 2009; Lipman, Georgiades y Boyle, 2011). Resulta importante destacar que la literatura indica que los hijos de madres adolescentes tienen mayor probabilidad de involucrarse en conductas delictivas, violencia, consumo de drogas, pertenencia a pandillas y detenciones (Pogarsky, Thornberry y Lizotte, 2006).

En Casavalle, el consumo de bienes y drogas está estrechamente vinculado a la ilegalidad, generando un ciclo particularmente difícil de romper en contextos de precariedad, lo que agrava progresivamente la crisis social (Echevarría et al., 2019). Por un lado, los robos y saqueos, incluso dentro de los domicilios de los propios criminales, perpetúan la inseguridad y la violencia comunitaria. Los bienes sustraídos son luego vendidos a bajo costo en mercados informales, consolidando una red de dependencias que fortalece el sistema delictivo (Echevarría et al., 2019). Por otro lado, el barrio es reconocido como un punto focal de venta de drogas, especialmente entre hombres jóvenes en espacios públicos (Portela, 2012). En el complejo sistema de distribución de ganancias derivadas del tráfico y consumo de drogas, los ingresos generados por hogares dedicados a la producción y venta de pasta base de cocaína⁹ superan ampliamente otras fuentes, particularmente la distribución minorista (Tenenbaum, 2018; Baudean y Rudnitzky, 2023). Además, el mercado ilícito persiste debido a la accesibilidad y variedad de sustancias ilegales disponibles (Echevarría et al., 2019).

4.2. Crimen organizado en Rosario: Del control centralizado a la atomización criminal

Argentina es uno de los países con menores índices de violencia en la región, con una tasa de homicidios de 4,6 por cada 100.000 habitantes en 2022 (equivalente a un total de 1.961 homicidios), y experimentando una reducción del 33% en esta tasa durante los últimos veinte años (Bergman et al., 2023). No obstante, al igual que en otros contextos, la violencia homicida se encuentra concentrada en determinadas áreas del país.

⁸ Se refiere a los primeros seis años de educación formal en Uruguay, correspondientes a la etapa educativa que abarca a niños de entre seis y doce años.

⁹ La pasta base se refiere a un polvo de color blanco mate, con una textura cremosa, compuesto por una mezcla de sustancias generadas durante el proceso de extracción de alcaloides de las hojas de coca (UNODC y DEVIDA, 2013).

En términos de narcotráfico, Argentina se consolidó como un país estratégico para el tránsito y almacenamiento de cocaína con destino a Europa (el segundo mercado de cocaína más grande y de más rápido crecimiento a nivel mundial)¹⁰ (EMCDDA y EUROPOL, 2022). Su extenso litoral, la porosidad de sus fronteras, la insuficiencia de controles portuarios y una infraestructura de transporte relativamente desarrollada posicionan al país como un nodo clave para el crimen organizado transnacional (Sampó y Troncoso, 2023). La hidrovía Paraná-Paraguay, junto con puertos importantes como Buenos Aires y Rosario, son frecuentemente utilizados para el contrabando de mercancías ilegales. En este contexto, diversas organizaciones criminales transnacionales, tales como el PCC, el Cártel de Sinaloa, la mafia albanesa y la 'Ndrangheta, operan en Argentina o usan al país como punto de tránsito, contribuyendo a la expansión del crimen organizado y la violencia (El PACCTO, 2025).

Rosario destaca como la ciudad más violenta de Argentina, con una tasa de homicidios de 22 por cada 100.000 habitantes, cifra que quintuplica la media nacional. Aunque Argentina mantiene una de las tasas de criminalidad, la lucha por el control del tráfico de drogas en Rosario la ha convertido en la ciudad más violenta del país (Bergman et al., 2023). Las actividades vinculadas al narcotráfico han generado un mercado violento, donde las condiciones geográficas y la infraestructura portuaria (destacándose como el mayor punto agroexportador del país)¹¹ amplifican la importancia estratégica de la ciudad para los grupos criminales (Flores y Newton, 2024). Como ya fue mencionado, Rosario funciona como un centro crítico tanto para el tránsito como para el almacenamiento de cocaína destinada a mercados internacionales. Sin embargo, es el mercado local de cocaína el que juega un papel en la generación de violencia. A diferencia de las operaciones internacionales, que suelen desarrollarse con relativa calma, la ausencia de un grupo criminal dominante en el comercio minorista local propicia violentas disputas territoriales (Dammert et al., 2024). Históricamente, organizaciones como Los Monos y el Clan Alvarado dominaron el escenario delictivo en Rosario, controlando redes de narcotráfico y extorsión. No obstante, tras la detención de sus líderes y la intensificación de conflictos internos, la ciudad vio una creciente fragmentación, con más de quince bandas criminales operando en la actualidad (La Nación, 2024). Esta fragmentación se refleja en un aumento de la puntuación de Argentina en el indicador de "grupos mafiosos"¹² del GOCI, que pasó de 4 a 5 puntos

¹⁰ En la Unión Europea, las encuestas indican que casi 2,5 millones de jóvenes de entre 15 y 34 años (el 2,5 % de este grupo etario) consumieron cocaína en el último año. Según EUROPOL, el valor total del mercado de la cocaína a nivel de calle en Europa se estima entre 7.600 y 10.500 millones de euros (EMCDDA y EUROPOL, 2022; EUDA, 2024).

¹¹ El Gran Rosario es el principal polo agroexportador de Argentina, en 2023, las terminales del Gran Rosario despacharon 42,4 millones de toneladas de granos, subproductos y aceites, lo que representó el 76% del total nacional embarcado ese año (Bolsa de Comercio de Rosario, 2024).

¹² La categoría "grupos mafiosos" se refiere a organizaciones criminales estructuradas que poseen liderazgo definido, control territorial, membresía reconocible y un nombre públicamente conocido. Estas agrupaciones, que pueden incluir milicias o actores armados no estatales, financian sus actividades principalmente a través

sobre 10. La fragmentación ha alimentado un ciclo de violencia, en el cual facciones rivales disputan la distribución de drogas, las extorsiones y otros mercados ilícitos, desestabilizando aún más el panorama de seguridad (El PACCTO, 2025). La situación en Rosario ejemplifica la dualidad del mercado de cocaína: mientras que los grandes envíos internacionales suelen operar sin violencia, las ventas minoristas locales están marcadas por intensos conflictos territoriales y episodios violentos. Esta distinción pone de relieve el papel de la fragmentación de grupos criminales como impulsores de la violencia local.

Los desafíos en Rosario se ven agravados por fallas institucionales y corrupción generalizada. Recientemente, funcionarios de alto rango policial han sido implicados en casos de corrupción (Lazzetta y Gaiero, 2025), lo que facilitó la infiltración del crimen organizado en las instituciones estatales, especialmente a nivel local (Flom, 2019; Feldmann y Luna, 2022). La debilidad en la gobernanza socava los esfuerzos para combatir la violencia y la delincuencia, con funcionarios públicos, policías y personal penitenciario frecuentemente involucrados en la facilitación del tráfico de drogas, extorsión y otras actividades ilícitas (Croci, 2022; GI-TOC, 2023b). Un aspecto crucial de esta infiltración criminal es la organización de operaciones de extorsión desde el interior de las prisiones, donde miembros de bandas criminales continúan ejerciendo influencia pese a estar encarcelados (GI-TOC, 2023b). La incapacidad del sistema penitenciario para contener estas actividades refleja debilidades institucionales más amplias, que permiten a las organizaciones delictivas consolidar su poder dentro de las prisiones, y también en zonas marginadas. En estas comunidades desatendidas, la ausencia de una intervención estatal efectiva permite a grupos criminales expandir su control sobre las poblaciones locales y mercados ilegales.

La distribución territorial de la violencia en Rosario está estrechamente vinculada a carencias socioeconómicas como el hacinamiento, la pobreza y la escasa presencia estatal. Estos “focos” de violencia coinciden con áreas donde operan grupos de crimen organizado (Bergman et al., 2023). La ausencia del Estado en las zonas más vulnerables no solo exacerba la violencia, sino que también contribuye a las condiciones que favorecen el crecimiento de los mercados ilegales (Miraglia, Ochoa y Briscoe, 2012). Por ejemplo, el barrio Ludueña, ubicado en el noroeste de Rosario, tiene significativos retos socioeconómicos, así como niveles crecientes de violencia. Desde 2021, Ludueña se convirtió en un escenario de confrontación entre bandas criminales involucradas en homicidios, extorsión y venta minorista de drogas, que disputan el control territorial (La Capital, 2025). Al mismo tiempo, un estudio reciente destaca las deficiencias que tiene el barrio en educación, salud y vivienda, junto con condiciones ambientales adversas como contaminación, riesgos de inundación y acceso limitado a

de economías ilegales y ejercen control social y político en ciertas zonas, desafiando la autoridad estatal. Su presencia se mide en términos de influencia territorial, capacidad coercitiva e infiltración institucional.

infraestructuras recreativas y culturales (Conicet, 2024). Estos factores agravan la vulnerabilidad social, refuerzan la exclusión estructural, y permiten el desarrollo del crimen organizado.

Uno de los principales problemas en Ludueña es la irregularidad en la tenencia de la tierra, ya que la mayoría de los residentes carecen de títulos de propiedad o documentación legal que garantice sus derechos. Además, la infraestructura básica es deficiente: muchos hogares presentan conexiones irregulares de electricidad y agua, y los sistemas de drenaje dependen de fosas sépticas o pozos (Conicet, 2024). Por otro lado, una encuesta reveló que el 40% de los hogares carece de acceso a la red de alcantarillado y un tercio no dispone de gas natural (La Capital, 2022). La educación también se ve afectada por una infraestructura escolar insuficiente, con numerosas escuelas en Ludueña enfrentando problemas estructurales como calefacción deficiente, goteras y falta de personal, lo que limita las oportunidades educativas (La Capital, 2024).

4.3. La batalla por Guayaquil: El impacto de los cárteles transnacionales

Entre 2018 y 2023, Ecuador experimentó un aumento significativo en su tasa de homicidios, creciendo un 650%, pasando de 6 a 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que posiciona al país como el más violento de América Latina. Este incremento se atribuye principalmente a la violencia generada por grupos de crimen organizado involucrados en mercados ilegales (OECD, 2024a). No obstante, esta tendencia tiene una marcada concentración territorial. Por ejemplo, en el cantón de Guayaquil, los homicidios aumentaron un 360% entre 2020 y 2022, mientras que en cantones como Naranjal y Nobol los incrementos fueron más moderados, con un 57% y 25% respectivamente. En contraste, en Lomas de Sargentillo se registró una disminución del 67% en el número de homicidios (OECD, 2024b). Paralelamente, otros delitos de alto impacto también crecieron significativamente, con un aumento del 690% en extorsiones y del 334% en secuestros durante el mismo periodo (ACAPS, 2024).

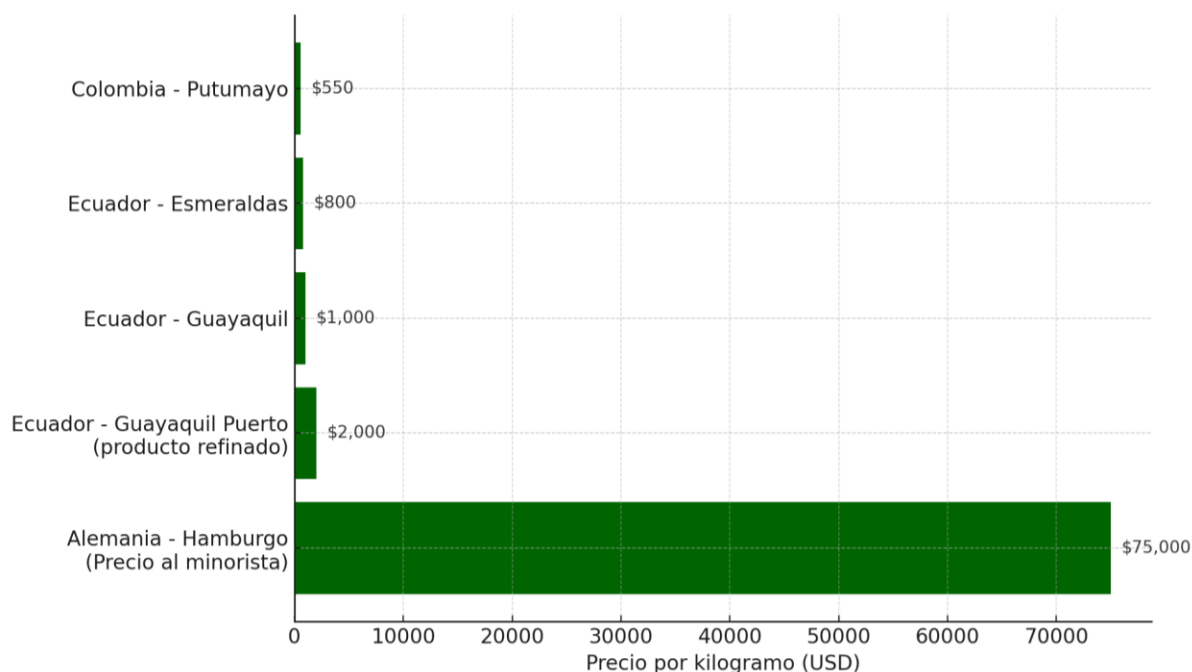
De acuerdo con informes recientes, el narcotráfico constituye la principal actividad del crimen organizado en Ecuador (OECD, 2023a). El país pasó de ser un punto de paso a convertirse en un centro estratégico de almacenamiento y distribución de cocaína. La frontera norte, limítrofe con las regiones colombianas productoras de coca en Nariño y Putumayo, funciona como el principal punto de entrada para el tráfico de esta droga (UNODC, 2023a). Se estima que alrededor de un tercio de la cocaína colombiana transita por Ecuador antes de dirigirse a Norteamérica y Europa (Jütten, 2024)¹³. En 2021, Ecuador obtuvo una puntuación de 7 sobre 10 en el indicador de “comercio de cocaína” del GOCI, cifra

¹³ La producción de cocaína en Colombia experimentó un aumento significativo entre 2018 y 2022, incrementándose en 618 toneladas, al pasar de 1.120 a 1.738 toneladas métricas. Este crecimiento representa un valor mínimo estimado de USD\$20.000 millones de dólares en los mercados mayoristas internacionales (Jütten, 2024)

que aumentó a 8,5 en 2023, reflejando un aún mayor desarrollo de su rol en el tráfico internacional (GI-TOC, 2023b). Además, se observa un aumento alarmante de consumo de cocaína en el país, el cual se disparó del 0,25% en 2007 al 3,35% en 2017, representando aproximadamente 557.000 consumidores. Lo cual hace el mercado local mucho más lucrativo para grupos criminales (ver figura 4).

El tráfico transfronterizo de estupefacientes es una actividad muy rentable para las organizaciones criminales, impulsado por una considerable escalada de precios a lo largo de las rutas de suministro. Por ejemplo, el precio de un kilogramo de pasta base de cocaína es aproximadamente USD 550 en el sur de Colombia, incrementándose a USD 800 en Esmeraldas, USD 1.000 en el puerto de Guayaquil y alcanzando alrededor de USD 2.000 tras el refinamiento a la salida del país (International Crisis Group, 2025). En los mercados finales, como Hamburgo, el precio puede llegar a los USD 75.000 (ver figura 3) (GI-TOC, 2021; EMCDDA, 2024).

Figura 3: Evolución del precio de la cocaína a lo largo de la cadena de tráfico.



Fuente: elaboración propia basados en estimaciones del International Crisis Group (2025) y GI-TOC (2021).

Además, se registró un aumento importante en número incautaciones. En 2019, se confiscaron aproximadamente 31 toneladas de cocaína, cifra que ascendió a cerca de 179 toneladas en 2022, lo que representa un incremento del 477% (UNODC, 2024). En la provincia de Guayas, las incautaciones pasaron de 3,8 toneladas en 2019 a aproximadamente 109 toneladas en 2022 (OECD, 2024b). Además, el tráfico de drogas desde Guayaquil hacia Amberes experimentó un aumento del 833%, pasando de 6 toneladas en 2018 a casi 56 toneladas en 2021 (Jütten, 2024). En consecuencia, el puerto de

Guayaquil, uno de los más grandes de la región, se consolidó como un eje central para el tráfico internacional de drogas. Esta posición se ve favorecida por las ventajas del transporte de contenedores a gran escala, que permite a los traficantes movilizar grandes cantidades de droga, anticipando pérdidas mínimas. Las fuerzas de seguridad estiman que solo entre el 2% y el 10% de los cargamentos son incautados, lo que permite ajustar el precio final de venta para compensar estas pérdidas (International Crisis Group, 2025). Por otro lado, el protagonismo de organizaciones criminales pequeñas y medianas en este comercio mundial de cocaína creció, operando más como redes descentralizadas que como entidades claramente definidas. Estos grupos controlan segmentos específicos de la cadena de suministro y establecen alianzas con otras organizaciones, dando lugar a una creciente especialización entre los actores involucrados (UNODC, 2023a). Como consecuencia, la puntuación de Ecuador en el indicador de “redes criminales”¹⁴ del GOCI aumentó de 5,5 a 7,5 puntos, situando al país en el quintil superior junto a naciones como Colombia, México, Siria y Jamaica (GI-TOC, 2023a).

Desde 2015, Ecuador vive un proceso de fragmentación criminal que dio lugar a la proliferación de múltiples organizaciones criminales que compiten por establecer su influencia territorial y el dominio de los mercados ilegales. Esta atomización intensificó la violencia, especialmente en los centros urbanos y en corredores estratégicos de tráfico. La firma del acuerdo de paz colombiano en 2016 y la desmovilización de las FARC interrumpieron momentáneamente el monopolio del tráfico de cocaína en el sur de Colombia, generando un vacío de poder que fue rápidamente aprovechado por grupos criminales ecuatorianos. Estos actores forjaron alianzas con organizaciones criminales internacionales, facilitando la infiltración en las fuerzas de seguridad y en instituciones estatales, al tiempo que usan el rol estratégico de Ecuador en el comercio global de cocaína (Jütten, 2024).

Por otro lado, el país tuvo importantes escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios de primer nivel y empresas estatales, revelando prácticas arraigadas de sobornos, malversación de recursos públicos y vínculos con organizaciones criminales (The Guardian, 2017; Berg y Bledsoe, 2024a; Vanderford, 2024). Dichos escándalos constituyen un obstáculo significativo en la lucha contra el crimen organizado. Un ejemplo destacado es la condena de exfuncionarios del ente regulador del

¹⁴ El indicador “redes criminales” se refiere a la presencia, estructura y grado de operación de agrupaciones delictivas que participan en mercados ilegales. Evalúa cuán organizadas están estas redes (por ejemplo, si actúan como mafias jerárquicas, pandillas territoriales, clanes familiares o redes transnacionales), su capacidad de ejercer control territorial o institucional, su nivel de sofisticación logística y su implicancia en múltiples delitos (como narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, etc.). La puntuación asignada busca capturar tanto la variedad como la intensidad del crimen organizado en el país.

sistema judicial¹⁵, jueces, fiscales, policías y el exdirector de la agencia penitenciaria SNAI¹⁶, quienes integraban una red destinada a garantizar la impunidad de narcotraficantes (Fiscalía General del Estado, 2025).

Por otro lado, organizaciones locales como Los Choneros, Los Lobos y Los Tiguerones establecieron alianzas con grupos internacionales como el Cártel de Sinaloa, la mafia albanesa y el CJNG (EL PACCTO, 2025). El crecimiento de redes descentralizadas propició la aparición de un sistema de “proveedores de servicios” que gestionan segmentos específicos de la cadena de suministro sin poseer directamente las drogas. Estas entidades facilitan la recogida de cocaína en puertos, proveen transporte local y garantizan la seguridad de los envíos, trabajando con múltiples clientes para coordinar entregas a diversos mercados. Por ejemplo, traficantes vinculados a los Balcanes y grupos italianos establecieron operaciones en Ecuador para facilitar el abastecimiento a mercados europeos (UNODC, 2023a). A su vez, en 2019, el Cártel de Sinaloa modificó su *modus operandi* pasando del involucramiento directo a un modelo descentralizado basado en pequeñas células intermediarias, reflejando una tendencia generalizada hacia la atomización criminal. Además, la escisión de organizaciones como Los Choneros dio lugar al surgimiento de grupos como Los Lobos, Los Tiguerones y Los Lagartos, desestabilizando aún más la seguridad en el país (UNODC, 2023a; OECO, 2023a). Esta expansión de grupos locales vinculados a redes descentralizadas incremento la competencia por las rutas de narcotráfico y los mercados internos, fenómeno potenciado por la muerte de líderes de bandas, que genera nuevas dinámicas competitivas y eleva los niveles de violencia¹⁷.

Originalmente facilitadores logísticos de cárteles colombianos y mexicanos, los grupos ecuatorianos consolidaron un mayor control sobre la distribución internacional de drogas, intensificando las disputas territoriales. Este fenómeno refleja una fragmentación más profunda, donde organizaciones centralizadas se dividen en facciones más pequeñas y violentas que compiten por el dominio. Por ejemplo, en la región fronteriza con Colombia, Los Choneros pasaron de colaborar a competir con los

¹⁵ El Consejo de la Judicatura de Ecuador es la entidad encargada de la gestión, supervisión y aseguramiento del cumplimiento disciplinario dentro del sistema judicial. Entre sus funciones principales se encuentran la supervisión de los recursos judiciales, la selección y formación de jueces, la garantía del funcionamiento eficiente de los tribunales y la aplicación de medidas disciplinarias para preservar la integridad de la judicatura. Asimismo, desempeña un papel fundamental en la promoción de la transparencia y la eficiencia del poder judicial, con el objetivo de fortalecer el Estado de Derecho (Consejo de la Judicatura, 2025).

¹⁶ SNAI es el acrónimo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador. Es la entidad estatal responsable de la administración del sistema penitenciario del país, incluyendo tanto los centros de privación de libertad para adultos como los centros de rehabilitación para adolescentes.

¹⁷ Un ejemplo ilustrativo de la dinámica delictiva en Ecuador es la muerte de Jorge Luis Zambrano, líder de la banda de los Choneros, en 2021. Este evento provocó la fragmentación del grupo en dos facciones rivales, las Águilas y los Fatales, lo que derivó en un aumento significativo de la violencia en las cárceles del país (Berg y Bledsoe, 2024b).

Comandos de la Frontera, un grupo disidente de las FARC con control territorial y participación en extorsiones (Parada Lugo, 2024). Como resultado de estos procesos, el indicador de actividad de “grupos mafiosos” del GOCI aumentó 1,5 puntos, alcanzando 8 sobre 10 y posicionando a Ecuador entre los quince países con mayor presencia mafiosa a nivel mundial (GI-TOC, 2023a).

Es importante destacar que los grupos del crimen organizado en Ecuador controlan el sistema penitenciario, siendo Los Choneros la organización más destacada, junto con Los Lagartos, Los Tiguerones y Los Chone Killers (OECD, 2023b). Aunque las cárceles son sus bases, estas organizaciones también operan en las calles, generando competencia territorial en ambos espacios (International Crisis Group, 2022; Berg y Bledsoe, 2024b). La crisis penitenciaria, caracterizada por hacinamiento crónico, falta de recursos y corrupción, facilita la gobernanza criminal dentro del sistema (World Prison Brief, s.f.).

La débil presencia estatal en Ecuador facilitó que grupos criminales establezcan formas de gobernanza paralela no sólo en las cárceles, sino también en comunidades portuarias y zonas urbanas marginadas y socialmente fragmentadas (Araújo y Costa, 2024; Orozco, 2022). Estas organizaciones narcotraficantes se aprovechan de la escasa vigilancia estatal en diversas provincias para facilitar el transporte terrestre de sustancias ilícitas hacia los puertos, donde frecuentemente ocultan la droga en cargamentos legales (GI-TOC, 2023d). A su vez, la falta de oportunidades laborales impulsa a muchas personas a integrarse en la economía ilegal, resultando en la cooperación de actores fuera de la organización. Por ejemplo, comunidades pesqueras participan activamente en el tráfico de cocaína como vigías o transportistas, mientras que jóvenes se involucran en la venta de drogas y su consumo- siendo habitual que los traficantes paguen con cocaína- (International Crisis Group, 2022; Wisner, 2024). Asimismo, las personas que habitan zonas bajo el control del crimen organizado experimentan elevados niveles de miedo, inseguridad y explotación, lo que incrementa su vulnerabilidad al trabajo forzado, la explotación sexual y la extorsión (Marinelli y Mendoza, 2023). Este fenómeno afecta especialmente a niños y adolescentes que residen en hogares marcados por la privación económica y barrios marginados con débil presencia institucional, en donde las escuelas funcionan como espacios de reclutamiento, quedando totalmente vulnerables a este contexto (Ramírez, 2023).

El cantón Durán, en la provincia del Guayas, destaca como el territorio más violento. En 2023, registró una tasa de homicidios de 148,07 por cada 100.000 habitantes, superando incluso a ciudades consideradas entre las más violentas del mundo, como Colima, Ciudad Obregón y Puerto Príncipe (World Atlas, 2024). Gran parte de esta violencia está vinculada al crimen organizado, especialmente a los enfrentamientos entre las bandas Chone Killers y Latin Kings, que disputan el control de los beneficios derivados de los mercados ilegales (GI-TOC, 2023b). La baja resiliencia social e institucional

del territorio facilita el reclutamiento de nuevos miembros, incluyendo el aumento en la incorporación de niños, lo que ha provocado un incremento en los homicidios de menores (con 15 jóvenes asesinados en 2023). Entre enero y junio de ese año, la Policía Nacional detuvo en Guayas a 367 niños y adolescentes de entre 12 y 17 años por delitos como porte ilegal de armas, sicariato, microtráfico y hurto, concentrándose la mayoría en la Zona 8, que incluye Durán (Walk Free Foundation, 2023).

La situación en Durán está marcada por condiciones de precariedad. Según la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), alrededor del 70% de la población no tiene acceso a redes de agua potable y el 78% carece de sistema de alcantarillado. Las lluvias frecuentes agravan la situación al generar inundaciones y provocar el rebose de letrinas (Investigación Durán, 2023). El acelerado crecimiento urbano, particularmente en asentamientos informales, dificulta la contabilización precisa de viviendas; se estima que más de la mitad de la ciudad se encuentra en zonas irregulares, lo que impide una adecuada provisión de servicios básicos. Esta situación se ve agravada por las limitaciones del Estado para garantizar servicios esenciales (Walk Free Foundation, 2023). El nivel de pobreza es elevado, afectando a siete de cada diez habitantes que tiene necesidades básicas insatisfechas, mientras que sólo el 47% ha completado la educación básica y apenas el 37% la educación secundaria. En este sentido, la escasa presencia estatal en Durán facilitó que actores criminales operen con impunidad, dedicándose a actividades como la extorsión a empresas locales, el control criminal de servicios públicos, el tráfico de tierras, el robo, el secuestro, el microtráfico y el narcotráfico internacional (Austin, 2024).

4.4 La paradoja de la seguridad en Costa Rica: de la estabilidad a un centro de tránsito de drogas

Costa Rica experimentó un importante aumento en los homicidios en los últimos años, alcanzando en 2023 su nivel más alto registrado con más de 900 muertes violentas (lo que representa una tasa de homicidios de 17,2), la mayoría vinculadas a grupos narcotraficantes. En 2024, aunque se observó una ligera reducción, el país registró su segundo año más violento, con una tasa de homicidios de 16,6 por cada 100.000 habitantes (OIJ, 2024; International Crisis Group, 2025). Durante ese año, aproximadamente el 74% de los homicidios fueron atribuidos a motivos de “venganza” o “represalia”, una tendencia constante desde 2019 (Observatorio de la Violencia, 2024). La venganza relacionada con el narcotráfico constituye la principal causa de violencia, representando cerca del 70% de los homicidios (Cavalari, Manjarrés y Newton, 2025), lo que tiene implicaciones para un país que históricamente ha sido reconocido por su estabilidad y seguridad (Stoenner, 2024).

El incremento en homicidios está parcialmente asociado al crecimiento del consumo local de cocaína, especialmente en su forma de crack, y a la intensa competencia entre grupos criminales por el control

del mercado interno de drogas. Los elevados ingresos generados por este mercado ilícito han alimentado la corrupción, agravando los desafíos institucionales del país. Esta dinámica ha posicionado a Costa Rica como un centro de tránsito para el narcotráfico, con bandas locales cada vez más involucradas tanto en la venta nacional como en el tráfico internacional de estupefacientes (Stoenner, 2024).

Con un extenso territorio marítimo en las costas del Pacífico y Caribe, Costa Rica se consolidó como un importante punto de tránsito para el narcotráfico, obteniendo una puntuación de 7,5 sobre 10 en el indicador de “comercio de cocaína” del GOCI en 2023 (GI-TOC, 2023a). El país funciona como un punto de transbordo para envíos de cocaína, cannabis y otras drogas, con destino a Estados Unidos y Europa. Esto se ve reflejado en las frecuentes incautaciones de contenedores dirigidos a puertos en España, Francia, Croacia, Países Bajos, Italia y Bélgica (GI-TOC, 2023c). Por otro lado, una porción menor de la droga permanece en Centroamérica para abastecer la demanda local, lo que ha impulsado el crecimiento de grupos delictivos que buscan alianzas con redes de tráfico mayores (Stoenner, 2024; GI-TOC, 2023c).

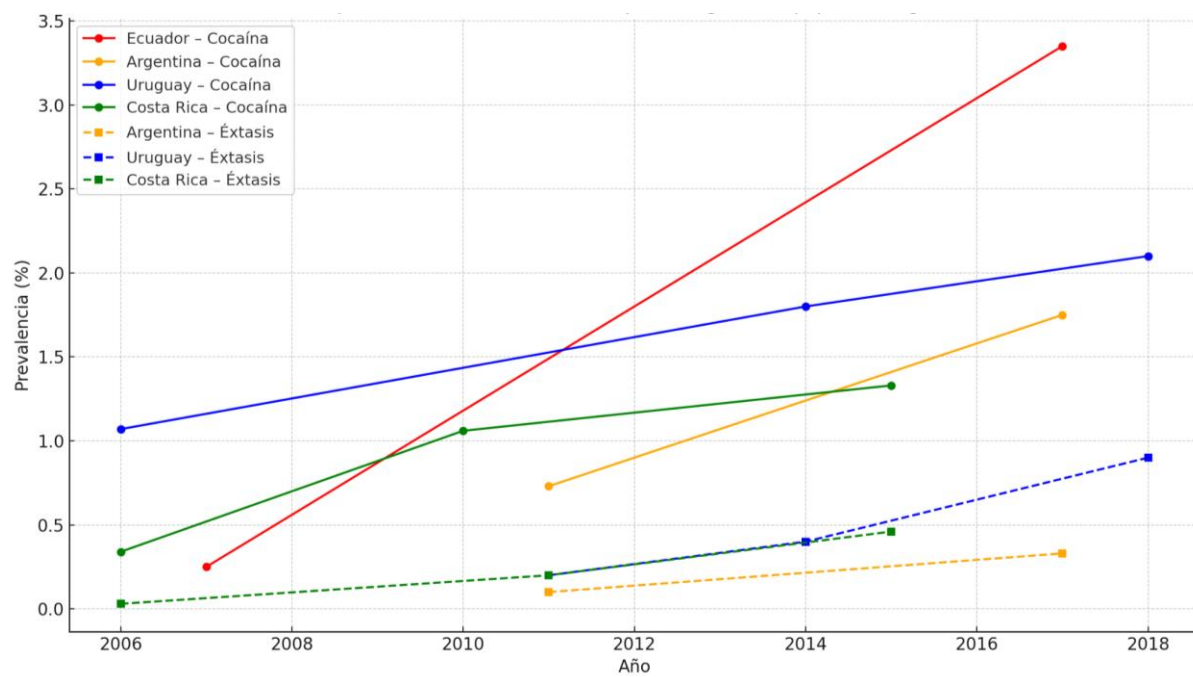
En Costa Rica, los cárteles colombianos y mexicanos, junto con la mafia italiana ‘Ndrangheta, participan activamente en el tráfico, colaborando con grupos locales como el Movimiento Revolucionario de Crimen Organizado (Los Moreco) (GI-TOC, 2023c). En particular, el Cártel de Sinaloa impulsa la violencia local mediante el suministro de armas a bandas costarricenses, librando una guerra por el control de las rutas de tráfico de droga. Paralelamente, grupos colombianos, incluidas células de las desmovilizadas FARC, han incrementado la competencia en el mercado costarricense a través de sus redes. Por su parte, el Clan del Golfo¹⁸ opera en el extremo sur del país, mientras que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación actúan en el norte, colaborando con organizaciones locales para facilitar el tráfico eficiente de drogas (Stoenner, 2024). Además del narcotráfico, estas organizaciones costarricenses han diversificado sus actividades hacia esquemas de extorsión, como el sistema informal de préstamos “gota a gota”¹⁹, que utiliza la coacción para asegurar el pago (GI-TOC, 2023c).

¹⁸ El Clan del Golfo, también conocido como Los Urabeños, Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan Úsuga, es una organización narco paramilitar que ha evolucionado desde estructuras post paramilitares hasta convertirse en la principal fuerza del narcotráfico en Colombia. Surgió tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006 y actualmente es considerada la agrupación criminal más grande y estructurada del país, con presencia en más de 200 municipios y una compleja red de operaciones nacionales e internacionales.

¹⁹ El fenómeno conocido como “gota a gota” consiste en la concesión de pequeños préstamos rápidos a particulares o pequeñas empresas sin requisitos formales, pero con tasas de interés extremadamente altas y pagos diarios en pequeñas cantidades —“una gota a la vez”. Cuando los deudores incumplen, los grupos criminales recurren a la intimidación y la violencia para exigir el pago, transformando esta práctica en un mecanismo de extorsión y control territorial.

El aumento de la presencia de cocaína en Costa Rica también se atribuye a avances tecnológicos en la producción colombiana, que redujo los costos significativamente. En años recientes, las principales organizaciones narcotraficantes han comenzado a pagar los servicios logísticos de organizaciones costarricenses con cocaína en lugar de efectivo, lo que incrementa la cantidad de droga disponible localmente para un país que cuenta con más de 100.000 consumidores de cocaína (Stoenner, 2024). Costa Rica mostró un crecimiento notable en el consumo de cocaína, pasando del 0,34% en 2006 al 1,33% en 2015, con cerca de 65.000 consumidores, junto con un incremento de más del doble en el consumo de éxtasis, que alcanzó el 0,46% (22.500 usuarios) (ver figura 4). Este aumento en el consumo y la proliferación de pequeñas redes dedicadas al transporte y almacenamiento de drogas contribuyeron a un incremento en asesinatos por encargo, disputas armadas y reclutamiento forzoso de jóvenes. Estas problemáticas se ven agravadas por el deterioro de las condiciones socioeconómicas, incluyendo el aumento del desempleo y el malestar social, deteriorando la percepción pública sobre la seguridad. El crimen se ha convertido en la principal preocupación electoral, mientras que la corrupción y el soborno han erosionado la confianza en las instituciones públicas (GI-TOC, 2023c). Estas dificultades estructurales limitan el acceso a la educación formal y a empleos dignos, especialmente para jóvenes; muchos de los cuales terminan en el mercado informal y son vulnerables al reclutamiento por parte de grupos criminales (Stoenner, 2024). Además, las escuelas se han transformado en escenarios de violencia (con casos de asesinatos de padres al dejar a sus hijos), junto con hallazgos de miembros amputados en espacios públicos y homicidios en hospitales perpetrados por bandas rivales (Abi-Habib y Cegarra, 2024).

Figura 4: Prevalencia de consumo de cocaína y éxtasis en países seleccionados (2006-2018).



Fuente: elaboración propia a partir de datos de la UNODC, 2024. Nota: no se dispone de datos sobre los niveles de consumo de éxtasis en Ecuador.

En 2024, la mayoría de los homicidios en Costa Rica se concentraron en las provincias de San José, Puntarenas y Limón. Esta última, ubicada en la costa caribeña, tiene una tasa de homicidios de 37.8 por cada 100.000 habitantes (SWI, 2025). La ciudad portuaria de Limón y la terminal de contenedores de Moín son centros neurálgicos para el narcotráfico y puntos de partida preferidos para envíos de cocaína a Europa. En 2023, Limón registró una tasa de homicidios de 91 por cada 100.000 habitantes, superando a San José (83), a pesar de tener una población tres veces menor (Organismo de Investigación Judicial, s.f.). Este aumento se atribuye principalmente a las disputas por el control de rutas comerciales y al incremento del flujo de cocaína en la región (Appleby, 2024; Ford, 2022). En la lucha por el control territorial también participan grupos dedicados al transporte de cannabis desde Jamaica hacia la costa caribeña, cuyos enfrentamientos violentos se concentran en zonas urbanas vulnerables (Calderón Umaña, 2013). Paralelamente, las principales organizaciones de narcotraficantes buscan asegurar el acceso a los puertos para exportar cocaína desde América Latina, apoyándose en colaboradores locales, favoreciendo así el surgimiento de grupos delictivos cada vez más sofisticados y poderosos en el país (Appleby, 2024).

A continuación, en la tabla 1 se presenta un resumen de las principales conclusiones de esta investigación.

Tabla 1: Análisis comparativo de los casos de estudio.

Ciudad	Tasa Homicidios	Principales Causas de Violencia	Actores Transnacionales	Grupos Locales Clave	Dinámicas de Corrupción	Rutas y Rol del Tráfico	Factores Socioeconómicos
Guayaquil	45 (2023)	Fragmentación de grupos criminales, narcotráfico internacional, disputas por el control del puerto	Cártel de Sinaloa, CJNG, Mafia Albanesa, 'Ndrangheta	Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones, Chone Killers	Infiltración en el poder judicial, prisiones y policía; protección a narcotraficantes	De Colombia a Guayaquil y luego a Europa (especialmente Amberes/Hamburgo); centro de almacenamiento	Zonas portuarias marginadas, importante desempleo juvenil, escasa provisión de servicios, economías informales
Rosario	22 (2023)	Colapso de bandas dominantes, microtráfico, corrupción institucional	PCC, Cártel de Sinaloa, Mafia Albanesa, 'Ndrangheta	Los Monos (fragmentados), Clan Alvarado, más de 15 bandas	Corrupción policial y política; extorsión desde cárceles	Bolivia/Paraguay hacia Rosario vía fluvial; exportación por puertos de Rosario/Buenos Aires	Pobreza urbana, débil presencia institucional, acceso limitado a empleo, déficits educativos
Montevideo	11 (2024)	Conflictos localizados por drogas, redes fragmentadas, vulnerabilidad socioeconómica	PCC, CV	Micro-redes, sin cárteles grandes	Fallas de supervisión; escándalos recientes revelan debilidades institucionales	Hidro vía Paraná-Paraguay hasta el puerto de Montevideo; centro de exportación a Europa	Zonas fragmentadas: pobreza, exclusión, servicios limitados y escasas oportunidades
Limón	38 (2024)	Disputas territoriales por rutas de droga, aumento del consumo local, competencia entre pandillas	Cártel de Sinaloa, CJNG, Clan del Golfo, 'Ndrangheta	Pandillas locales vinculadas a grupos internacionales	Corrupción en aduanas y puertos; incremento del soborno debilita la gobernanza	Punto de tránsito de cocaína hacia EE. UU. y Europa; puertos de Moín/Limón	Zonas costeras abandonadas, infraestructura deficiente, desempleo juvenil

5. Discusión y conclusión

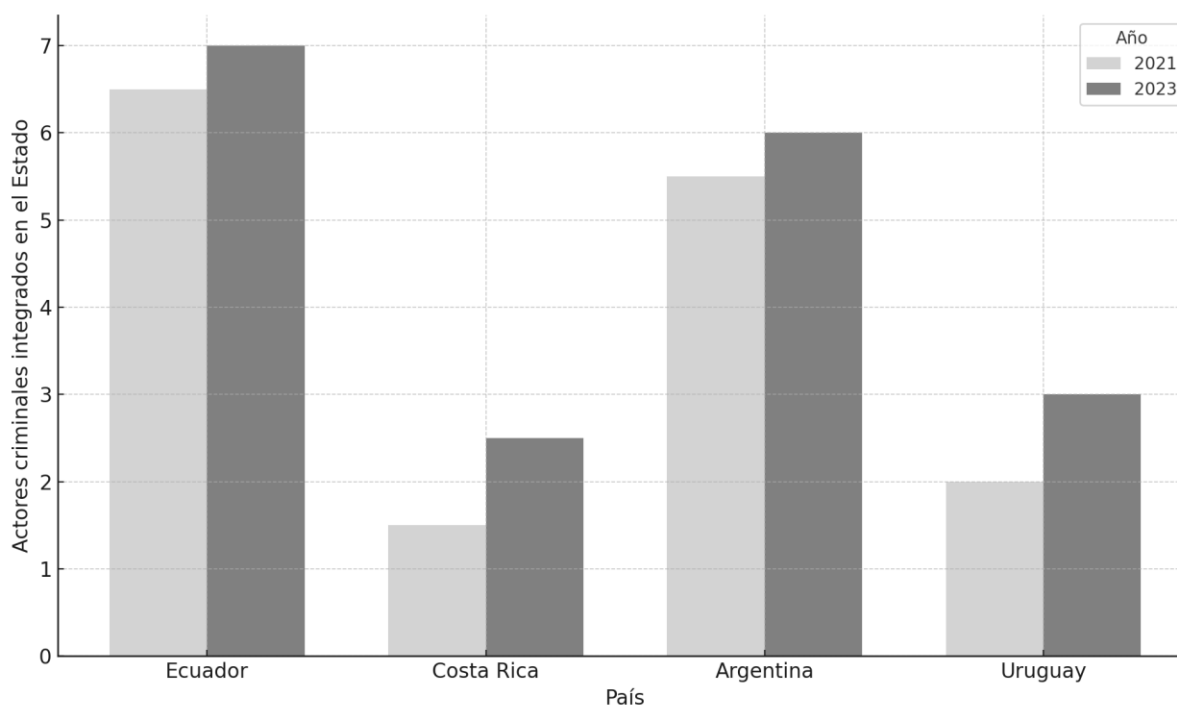
Los resultados de esta investigación evidencian la compleja y dinámica naturaleza de la violencia asociada al crimen organizado en América Latina. Los casos de Guayaquil, Rosario, Limón y Montevideo ilustran cómo la interacción entre redes criminales transnacionales, la fragmentación de estructuras delictivas locales y las vulnerabilidades institucionales contribuyen a la escalada de la violencia. Aunque cada ciudad presenta características particulares y diferentes intensidades en violencia, existen factores estructurales comunes —como la expansión de los mercados ilícitos, la debilidad de la gobernanza y las privaciones socioeconómicas— que configuran un entorno propicio para la proliferación del crimen organizado.

Una primera conclusión es el impacto de la fragmentación criminal. En Ecuador, el desmantelamiento de organizaciones dominantes propició la emergencia de múltiples grupos más pequeños y violentos, fenómeno que se ha visto agravado por la infiltración de actores transnacionales como el cártel de Sinaloa y la mafia albanesa. Esta dinámica intensificó la competencia por el control territorial y los mercados ilícitos. De forma similar, en Rosario, la decadencia de grupos centralizados como Los Monos dio paso a más de quince bandas rivales que disputan la distribución de drogas y el negocio de la extorsión. Montevideo, aunque carece de estructuras delictivas a gran escala, exhibe un patrón de violencia alimentado por redes pequeñas dedicadas al microtráfico y a conflictos territoriales.

El segundo hallazgo destaca el papel de las debilidades institucionales en la expansión del crimen organizado. En los cuatro casos analizados, la corrupción, la ineficacia y la fragilidad de los mecanismos de aplicación de la ley limitan la capacidad estatal para responder eficazmente al aumento de la violencia. En Rosario, las organizaciones criminales llegaron al extremo de infiltrarse en las estructuras políticas y policiales locales, lo que ha permitido que los mercados ilegales persistan con impunidad (véase figura 4). En Guayaquil, las fuerzas de seguridad enfrentan dificultades para combatir el arraigo de organizaciones criminales transnacionales, mientras que en Montevideo las estrategias policiales aún no abordan plenamente los factores estructurales del crimen organizado. Las prisiones, en lugar de actuar como mecanismos disuasivos o de rehabilitación, se han convertido en centros operativos desde donde líderes encarcelados controlan mercados ilegales, y los niveles de violencia y extorsión. Estas debilidades institucionales se reflejan en el incremento de las puntuaciones en el indicador “actores estatales”²⁰ del GOCI, que evidencia el creciente papel de funcionarios corruptos en la facilitación del crimen organizado, particularmente en Ecuador y Argentina (véase gráfico 4).

²⁰ La variable “actores estatales” evalúa el involucramiento de funcionarios públicos, fuerzas de seguridad o actores del gobierno en actividades del crimen organizado. Este indicador considera si individuos o instituciones del Estado participan directa o indirectamente en mercados ilegales (por ejemplo, mediante

Gráfico 4: Actores estatales involucrados en actividades del crimen organizado (2021 y 2023).



Fuente: elaboración propia con datos del Índice Global del Crimen Organizado (2023). Nota: "Actores estatales" es una métrica que mide hasta qué punto los funcionarios del Estado (como policías, políticos o militares) están implicados en el crimen organizado o lo permiten. Una puntuación más alta (cercana a 10) significa una mayor complicidad del Estado en las redes delictivas.

El tercer aspecto relevante se refiere a la evolución de los mercados ilícitos y su influencia en la violencia. América Latina, tradicionalmente región de tránsito para la cocaína dirigida a Norteamérica y Europa, ha visto cómo la creciente implicación de actores locales en el comercio mundial de drogas ha intensificado los conflictos internos. La hidrovía Paraná-Paraguay se consolidó como un corredor clave para el narcotráfico, facilitando el tránsito de cocaína a través de Argentina y Uruguay hacia mercados internacionales. El puerto de Guayaquil, convertido en un importante centro de transbordo, también ejemplifica cómo las economías ilícitas reconfiguran la violencia urbana, a medida que los grupos delictivos disputan el control de infraestructuras y territorios estratégicos. En Costa Rica, especialmente en la ciudad portuaria de Limón, el aumento del tráfico de cocaína provocó una escalada de violencia. A medida que la ciudad se consolida como punto de partida de cocaína, se intensifican las disputas por el control de rutas comerciales y el acceso al puerto. Este fenómeno, junto con el crecimiento de mercados ilegales locales y el aumento del consumo, hizo que estos territorios resulten atractivos para grupos criminales fragmentados que compiten activamente por su control.

protección, complicidad o participación), y hasta qué punto el aparato estatal ha sido cooptado o infiltrado por redes criminales. También analiza si existe una instrumentalización del poder estatal para facilitar o encubrir actividades ilícitas.

Dado que estos grupos suelen ser más débiles que las organizaciones transnacionales típicas, no pueden sostener su dominio únicamente mediante amenazas, sino que deben emplear activamente la violencia (Snyder y Durán-Martínez, 2009; Durán-Martínez, 2017).

Estas conclusiones evidencian que la violencia del crimen organizado en América Latina no puede abordarse exclusivamente con estrategias convencionales de aplicación de la ley. Se requiere un enfoque multidimensional que combine un fortalecimiento de la capacidad policial, judicial y penitenciaria con intervenciones socioeconómicas de largo plazo. El reforzamiento institucional, la mejora en los mecanismos de intercambio de inteligencia y la reducción de la corrupción en las en el sistema de justicia son pasos importantes para restaurar la autoridad Estatal. Asimismo, es fundamental invertir en políticas sociales dirigidas a comunidades vulnerables, incluyendo programas educativos, oportunidades económicas e iniciativas de desarrollo urbano, con el fin de contrarrestar las condiciones que favorecen el reclutamiento delictivo y sostienen los mercados ilegales. Un marco conceptual útil para interpretar estas dinámicas es la noción de Marcuse (1989) sobre la «ciudad acuartelada», en la que las desigualdades espaciales y la concentración de privaciones socioeconómicas refuerzan ciclos de exclusión y violencia. Aunque con diferentes niveles de intensidad, en Guayaquil, Limón, Rosario y Montevideo, el crimen organizado prospera en barrios marginales caracterizados por una mínima presencia estatal, servicios públicos deficientes y escasas oportunidades económicas. Estas características, destacan las condiciones en las cuales opera el crimen organizado, con diferentes matices en cada ciudad, pero bajo el mismo tipo de debilidades estructurales. Como resultado, en los casos presentados, las respuestas deben resolver las mismas deficiencias, pero con enfoques adaptados al contexto y magnitud de la situación en cada país. Por ello, enfrentar el crimen organizado implica no solo dismantelar las estructuras criminales, sino también recuperar estos territorios.

En consecuencia, las respuestas políticas deben ser adaptativas, integradas y sostenidas en el tiempo. Fortalecer las instituciones, mejorar la inteligencia y combatir la corrupción son medidas necesarias pero insuficientes. De igual modo, las inversiones en educación, desarrollo urbano y alternativas económicas son cruciales para reducir el atractivo y la viabilidad de los mercados ilegales. Un enfoque único no puede contemplar todas las variaciones locales en gobernanza criminal y resiliencia institucional. Los casos comparativos presentados aquí subrayan la importancia de estrategias multidimensionales contextualizadas para revertir el arraigo de la violencia organizada en la región.

Bibliografía

- ACAPS. (2024). *Increased violence amid internal armed conflict leads to protection concerns*. Retrieved from https://www.acaps.org/fileadmin/Data_Product/Main_media/20240321_ACAPS_Ecuador_-_Increased_criminal_violence_amid_internal_armed_conflict.pdf
- ADORNO, S., & DIAS, C. N. (2019). Brazil: organised crime, corruption and urban violence. In F. Allum, F. & Gilmour, S. (Eds.). *Handbook of organised crime and politics*. (pp.226-241). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- ARAÚJO, V. C., & COSTA, M. A. (2024). Redução de homicídios pelos programas “Pacto pela Vida” e “Unidades de Polícia Pacificadora” entre 2008 e 2017: uma análise por controle sintético. *Revista Econômica do Nordeste*, 55(2), 68-86.
- APPLEBY, P. (2024). ¿Seguirá Costa Rica el camino criminal de Ecuador? *InSight Crime*. Retrieved from <https://insightcrime.org/es/noticias/seguira-costa-rica-camino-criminal-ecuador/>
- ARIAS, E. D., & BARNES, N. (2017). Crime and plural orders in Rio de Janeiro, Brazil. *Current Sociology*, 65(3), 448-465.
- ATUESTA, L. H., & PÉREZ-DÁVILA, Y. S. (2018). Fragmentation and cooperation: the evolution of organized crime in Mexico. *Trends in Organized Crime*, 21(3), 235-261.
- AUSTIN, A. (2024). Web of illicit economies ensnaring Durán, Ecuador. *InSight Crime*. Retrieved from <https://insightcrime.org/investigations/web-illicit-economies-ensnaring-duran-ecuador/>
- BABA, S., ISO, H., & FUJIWARA, T. (2016). Area-level and individual-level factors for teenage motherhood: a multilevel analysis in Japan. *Plos One*, 11(11).
- BAKER, J. (2001). *Social exclusion in urban Uruguay*. Retrieved from <https://documents1.worldbank.org/curated/en/510741468762936838/txt/270370Social0e1bl ic10See0also024499.txt>
- BAUDEAN, M., Y RUDNITZKY, F. (2023). El crecimiento de la violencia en los mercados de drogas: el caso de Uruguay (2012-2019). *Revista de Ciencias Sociales*, 36(53), 89-127.

- BERG, R., & BLEDSOE, R. (2024a). Why Ecuador's Security Crisis Demands Global Action. *Center for Strategic & International Studies - CSIS*. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/why-ecuadors-security-crisis-demands-global-action?>
- BERG, R. & BLEDSOE, R. (2024b). Eye of the storm: Ecuador's compounding crises. *Center for Strategic & International Studies - CSIS*. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/eye-storm-ecuadors-compounding-crises>
- BERGMAN, M., AMBROGI, J., BRUNO, M., CROCI, G. & PRUEGER, E. A. (2023). *Estudio sobre homicidios en Argentina: un análisis del periodo 2001-2021*. Buenos Aires: CELIV/UNTREF.
- BERGMAN, M., & FONDEVILA, G. (2021). *Prisons and crime in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- CALDERÓN UMAÑA, R. (2013). Propositiones analíticas para el estudio de la violencia en Centroamérica: una mirada desde la exclusión social. *Revista Digital De Ciencias Penales De Costa Rica*, (5), 199–226.
- CATINO, M. (2020). Italian organized crime since 1950. *Crime and Justice*, 49, 69-140.
- CAVALARI, M., MANJARRÉS, J., & NEWTON, C. (2025). Homicide round-up 2024. *InSight Crime*. Retrieved from <https://insightcrime.org/news/insight-crime-2024-homicide-round-up/>
- CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REALIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL - CERES (2024). *Entrevista al experto Dr. Gonzalo Croci*. Recuperado de https://ceres.uy/index.php/estudios/ficha_estudio/114
- CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS - CONICET (2024). *Registro Nacional de Barrios Populares—Ludueña [Map]*. Recuperado de <https://mapa.poblaciones.org/map/#/@-32.930831,-60.702489,16z/f=f1064726687647445>
- CONSEJO DE LA JUDICATURA de ecuador (2025). *Normativa vigente*. Recuperado de <https://www.funcionjudicial.gob.ec/normativa/>
- CONTRERAS, D., DELGADILLO, J., & RIVEROS, G. (2019). Is home overcrowding a significant factor in children's academic performance? Evidence from Latin America. *International Journal of Educational Development*, 67, 1-17.

Costa Rica vivió en 2023 el año más violento de su historia (3 de enero de 2024). *DW: Actualidad*.

Recuperado de <https://www.dw.com/es/costa-rica-vivi%C3%B3-en-2023-el-a%C3%B1o-m%C3%A1s-violento-de-su-historia/a-67879667>

CROCI, G. (2022). *Towards an institutional perspective for understanding and reducing homicides in*

Latin America. Doctoral thesis. University College London - UCL. Retrieved from <https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10148897/>

Curbing violence in Latin America's drug trafficking hotspots (11, March 2025). *International Crisis*

Group. Report nº 11, Latin America & Caribbean. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/colombia-ecuador-guatemala-honduras-mexico/108-curbing-violence-latin-america-drug-trafficking-hotspots>

DALBY, C. (2022). Uruguay asks difficult questions about Italian Mobster's Jailbreak. *Insight Crime*.

Retrieved from <https://insightcrime.org/news/uruguay-confronts-legacy-jailbreak-high-profile-italian-mobster/>

DAMMERT, L., CROCI, G., & FREY, A. (2024). *¿Por qué tanta violencia homicida en América Latina?*

Caracterizando el fenómeno y expandiendo su marco de interpretación. (WP nº 94). Madrid: Fundación Carolina.

DE LOS SANTOS, G. (2024). Cambio de objetivos. En Rosario la guerra ya no es entre bandas: Ahora, el

crimen organizado quiere tener la ciudad en su puño. *La Nación*. Recuperado de <https://www.lanacion.com.ar/seguridad/nuevo-objetivo-en-rosario-la-guerra-ya-no-es-entre-bandas-ahora-el-crimen-organizado-quiere-tener-la-nid02042024/>

DENZIN, N. K. (2017). Critical qualitative inquiry. *Qualitative Inquiry*, 23(1), 8-16.

Docentes de una escuela de Ludueña denuncian que hace 4 años que están sin gas. (6 de junio de

2024). *La Capital*. Recuperado de <https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/docentes-una-escuela-ludueña-denuncian-que-hace-4-años-que-están-sin-gas-n10137347.html>

- DOHERTY, S., & DEN HELD, D. (2023). Balance de InSight Crime de las incautaciones de cocaína en 2022. *Insight Crime*. Retrieved from <https://insightcrime.org/es/noticias/balance-insight-crime-incautaciones-cocaina-2022/>
- D'ONOFRIO, B. M., et. al. (2009). Maternal age at childbirth and offspring disruptive behaviors: testing the causal hypothesis. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 50(8), 1018-1028.
- DURÁN-MARTÍNEZ, A. (2017). *The politics of drug violence: criminals, cops and politicians in Colombia and Mexico*. Oxford: Oxford University Press.
- ECHIVARRIA, M., PASSEGGI, C., RINALDI, H., & SARTORIO, V. (2019). *Casavalle, un palimpsesto urbano y humano. Precariedad Socio Urbano Habitacional: Análisis, acciones y propuestas*. Montevideo: FADU-UDELAR. Recuperado de https://www.fadu.edu.uy/sie/files/2020/05/PSUH-CH84-Echevarria_Passeggi_Rinaldi_Sartorio.pdf
- Ecuador's high tide of drug violence (4, November 2022). *International Crisis Group*. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/andes/ecuador/ecuadors-high-tide-drug-violence>
- Encuesta de hogares Rosario: un tercio de la población no logra acceder a los servicios básicos. (24 de noviembre de 2022). *La Capital*. Recuperado de <https://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/encuesta-hogares-rosario-un-tercio-la-poblacion-no-logra-acceder-los-servicios-basicos-n10033967.html>
- Entrega de pasaporte a Maset: Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos investigará el caso. (01 de septiembre de 2022). *El País*. Recuperado de <https://www.elpais.com.uy/informacion/judiciales/entrega-de-pasaporte-a-maset-fiscalia-de-delitos-economicos-y-complejos-investigara-el-caso>
- ESBERG, J. (2020). More cartels than counting: Mexico's crime rings. *International Crisis Group*. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/mexico/more-cartels-counting-mexicos-crime-rings>

EUROPEAN MONITORING CENTRE FOR DRUGS AND DRUG ADDICTION – EMCDDA, & EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION - EUROPOL (2022). *EU drug market: cocaine*. Retrieved from <https://data.europa.eu/doi/10.2810/944155>

EUROPEAN UNION - EU; INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES - ISS; THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION - INTERPOL & GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME – GI-TOC (2023a). *Global Organized Crime Index*. Retrieved from <https://ocindex.net/>

EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION – EUROPOL (2025). The changing DNA of serious and organised crime. *European Union Serious and Organised Crime Threat Assessment*. Retrieved from <https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/EU-SOCTA-2025.pdf>

EUROPEAN UNION AGENCY FOR LAW ENFORCEMENT COOPERATION - EUROPOL. (2022). 2022 EU drug markets analyses from Europol and the EMCDDA. *EUROPOL*. Retrieved from <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/2022-eu-drug-markets-analyses-europol-and-emcdda>

EUROPEAN UNION DRUGS AGENCY - EUDA (2024). Cocaine: the current situation in Europe. *European Drug Report 2024*. Retrieved from https://www.euda.europa.eu/publications/european-drug-report/2024/cocaine_en

FARAH, D. (2024). *Fourth transnational criminal wave: new extra regional actors and shifting markets transform Latin America's illicit economies and transnational organized crime alliances*. (Research Publications JGI nº 64). Miami: Florida International University. Retrieved from https://digitalcommons.fiu.edu/jgi_research/64

FELDMANN, A. E., & LUNA, J. P. (2022). Criminal governance and the crisis of contemporary Latin American states. *Annual Review of Sociology*, 48(1), 441-461.

FLOM, H. (2019). State regulation of organized crime: politicians, police, and drug trafficking in Argentina. *Latin American Politics and Society*, 61(3), 104-128.

- FLOREZ, A., & NEWTON, C. (2024). How Rosario became Argentina's drug violence capital. *InSight Crime*. Retrieved from <https://insightcrime.org/news/interview/how-rosario-became-argentinas-capital-drug-violence/>
- FLYVBJERG, B. (2006). Five misunderstandings about case-study research. *Qualitative Inquiry*, 12(2), 219-245.
- FORD, A. (2022). Provincia de Limón en Costa Rica concentra narcotráfico y homicidios. *InSight Crime*. Recuperado de <https://insightcrime.org/es/noticias/provincia-limon-costa-rica-concentra-narcotrafico-homicidios/>
- GAMBETTA, D. (1996). *The Sicilian Mafia: the business of private protection*. United Kingdom: Harvard University Press.
- GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME – GI-TOC (2023b). *The Organized Crime Index: Argentina*. Retrieved from https://ocindex.net/assets/downloads/2023/english/ocindex_profile_argentina_2023.pdf
- GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME – GI-TOC (2023c). *The Organized Crime Index: Costa Rica*. Retrieved from https://ocindex.net/assets/downloads/2023/english/ocindex_profile_costa_rica_2023.pdf
- GLOBAL INITIATIVE AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME – GI-TOC (2023d). *The Organized Crime Index: Ecuador*. Retrieved from https://ocindex.net/assets/downloads/2023/english/ocindex_profile_ecuador_2023.pdf
- GOVE, W. R., HUGHES, M., & GALLE, O. R. (1979). Overcrowding in the home: an empirical investigation of its possible pathological consequences. *American Sociological Review*, 44(1), 59.
- GOBIERNO DE COSTA RICA. MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ. OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA (2024). *Análisis de homicidios dolosos, 2024*. Recuperado de https://observatorio.mj.go.cr/sites/default/files/docs/homicidios_dolosos_2024.pdf
- GRAFMEYER, Y., & JOSEPH, I. (1979). *La ville-laboratoire et le milieu urbain. L'école de Chicago: Naissance de l'écologie urbaine*. Paris: Éditions du Champ Urbain.

HOWARD, D., HUME, M., & OSLENDER, U. (2007). Violence, fear, and development in Latin America: a critical overview. *Development in Practice*, 17(6), 713-724.

HUMAN RIGHTS WATCH (2025). Rights trends in Ecuador. *World Report 2025*. Retrieved from <https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/ecuador>

IAZZETTA, M., & GAIERO, M. (2025). Narcotráfico y política. Gestión de la seguridad pública y violencia en Rosario, Argentina (2013-2015). *URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad*, 41, 30-46. <https://doi.org/10.17141/urvio.41.2025.6277>

IGARAPÉ INSTITUTE (2025). *Homicide Monitor*. Retrieved from <https://homicide.igarape.org.br>

INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO – IMM. (2019). Municipio D. *Casavalle*. Recuperado de <https://municipiod.montevideo.gub.uy/node/168>

INVESTIGACIÓN DURÁN. (2023). *Durán: Radiografía de una ciudad paralizada*. Retrieved from <https://investigacionduran.ec/reportajes/duran-radiografia-de-una-ciudad-paralizada/>

JÜTTEN, M. (2024). *EU cooperation with Latin America: combating drug trafficking in the Andean region*. European Parliamentary Research Service – EPRS. Retrieved from [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762286/EPRS_BRI\(2024\)762286_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024/762286/EPRS_BRI(2024)762286_EN.pdf)

KANE, J. B., MORGAN, S. P., HARRIS, K. M., & GUILKEY, D. K. (2013). The educational consequences of teen childbearing. *Demography*, 50(6), 2129-2150.

LESSING, B. (2020). Conceptualizing Criminal Governance. *Perspectives on Politics*, 19(3), 854-873.

LEVITSKY, S., & MURILLO, M. V. (2013). Lessons from Latin America: building institutions on Weak Foundations. *Journal of Democracy*, 24(2), 93-107.

LIPMAN, E. L., GEORGIADES, K., & BOYLE, M. H. (2011). Young adult outcomes of children born to teen mothers: effects of being born during their teen or later years. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 50(3), 232-241.

LOPOO, L. M., & LONDON, A. S. (2016). Household crowding during childhood and long-term education outcomes. *Demography*, 53(3), 699-721.

- Ludueña: condena para un gatillero de una banda ligada a Los Monos. (24 de septiembre de 2024). *La Capital*. Recuperado de <https://www.lacapital.com.ar/policiales/ludueña-condena-un-gatillero-una-banda-ligada-los-monos-n10155307.html>
- MAKINDE, O., BJÖRKQVIST, K., & ÖSTERMAN, K. (2016). Overcrowding as a risk factor for domestic violence and antisocial behaviour among adolescents in Ejigbo, Lagos, Nigeria. *Global Mental Health*, 3(e16), 1-9.
- MALDONADO, B., & TERRÉ, E. (2024). Los embarques de granos, subproductos y aceites desde puertos argentinos cayeron a un mínimo de 14 años en 2023. *Bolsa de Comercio de Rosario*. Recuperado de <https://www.bcr.com.ar/es/mercados/investigacion-y-desarrollo/informativo-semanal/noticias-informativo-semanal/los-26>
- MARINELLI, C., & MENDOZA, D. (2023). Riesgos e impactos de la doble afectación y el Crimen Organizado sobre las personas refugiadas y migrantes de Venezuela. *Informe de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)*. Recuperado de https://www.r4v.info/sites/g/files/tmzbd12426/files/2023-02/R4V_Informe_DA_CO_15FEB2022.pdf
- MCDERMOTT, J., BARGENT, J., DEN HELD, D. & RAMÍREZ, M. F. (2021). *The cocaine pipeline to Europe*. Research Report. Geneva: Global Initiative Against Transnational Organized Crime – InSight Crime. Retrieved from <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/02/The-cocaine-pipeline-to-Europe-GI-TOCInsightCrime.pdf>
- MESSNER, S. F., & TARDIFF, K. (1986). Economic inequality and levels of homicide: an analysis of urban neighborhoods. *Criminology*, 24(2), 297-316.
- MIRAGLIA, P., OCHOA, R., & BRISCOE, I. (2012). *Transnational organised crime and fragile states*. (WP n° 5/2012 OECD/DAC/ICPC). Retrieved from https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2012/10/transnational-organised-crime-and-fragile-states_g17a2274/5k49dfg88s40-en.pdf

MÜLLER, M.-M. (2018). Governing crime and violence in Latin America. *Global Crime*, 19(3-4), 171-191.

NEWTON, C. (2024a). Uruguay enfrenta creciente amenaza del crimen organizado. *InSight Crime*. Recuperado de <https://insightcrime.org/es/noticias/uruguay-enfrenta-creciente-amenaza-crimen-organizado/>

NEWTON, C. (2024b). Uruguay corruption in spotlight after ex-official's release from prison. *InSight Crime*. Retrieved from <https://insightcrime.org/news/interview/uruguay-corruption-spotlight-ex-official-release-prison/>

NIVETTE, A. E., & EISNER, M. (2013). Do legitimate polities have fewer homicides? A cross-national analysis. *Homicide Studies*, 17(1), 3-26.

OBSERVATORIO ECUATORIANO DE CRIMEN ORGANIZADO - OECO (2024a). *Boletín semestral de homicidios intencionales en Ecuador: 2024*. Retrieved from <https://oeco.pdf.org/boletin-semestral-de-homicidios-intencionales-en-ecuador-enero-junio-2024/>

OBSERVATORIO ECUATORIANO DE CRIMEN ORGANIZADO - OECO (2024b). *Visualizador de datos. Número de homicidios*. Retrieved from <https://oeco.pdf.org/visualizador-de-datos-numero-de-homicidios/>

OBSERVATORIO ECUATORIANO DE CRIMEN ORGANIZADO - OECO (2023a). *Boletín semestral de homicidios intencionales en Ecuador*. Retrieved from <https://oeco.pdf.org/boletin-homicidios-intencionales-ecuador/>

OBSERVATORIO ECUATORIANO DE CRIMEN ORGANIZADO - OECO (2023b). *Informe de caracterización del crimen organizado en Ecuador*. Retrieved from <https://oeco.pdf.org/caracterizacion-del-crimen-organizado-en-ecuador/Response>.

Odebrecht scandal: Ecuador vice-president given six years' jail. (14 December, 2017). *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2017/dec/14/odebrecht-scandal-ecuador-vice-president-given-six-years-jail?>

- OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO – UNODC (2013). *Pasta básica de cocaína: Cuatro décadas de historia, actualidad y desafíos*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/peruandecuador/Publicaciones/Publicaciones2013/LIBRO_PBC.pdf
- OROZCO, M. (2022). *Estas son las provincias con mayor y menor pobreza del país*. <https://www.primicias.ec/noticias/economia/amazonia-provincias-pobreza-empleo-ecuador/>
- OSBORN, D. R. & TSELONI, A. (1998). The distribution of household property crimes. *Journal of Quantitative Criminology*, 14(3), 307-330.
- PAOLI, L. (Ed.). (2014). *The Oxford Handbook of organized crime*. Oxford: Oxford University Press.
- PARADA LUGO, V. (2024). Los grupos narcotraficantes de Colombia y Ecuador se enfrentan en la frontera amazónica por el negocio de la coca. *El País*. Recuperado de <https://elpais.com/america/amazonia-sin-fronteras/2024-11-29/los-grupos-narcotraficantes-de-colombia-y-ecuador-se-enfrentan-en-la-frontera-amazonica-por-el-negocio-de-la-coca.html>
- POGARSKY, G., THORNBERRY, T. P., & LIZOTTE, A. J. (2006). Developmental outcomes for children of young mothers. *Journal of Marriage and Family*, 68(2), 332-344.
- PORTELA, M. (2012). Diagnóstico local sobre la problemática de las drogas en Casavalle—Barrio Municipal. *Informe Final*. Montevideo: OUD-JND. Recuperado de https://www.gub.uy/junta-nacional-drogas/sites/junta-nacional-drogas/files/2018-01/Diagn%C3%B3stico%20Casavalle_Marcia%20Barbero.pdf
- RAMÍREZ, M. F. (2024). Disputes over drug trafficking routes drive child recruitment in Ecuador. *Insight Crime*. Recovered from <https://insightcrime.org/news/disputes-over-drug-trafficking-routes-drive-child-recruitment-ecuador/>
- REGOECZI, W. C. (2008). Crowding in context: an examination of the differential responses of men and women to high-density living environments. *Journal of Health and Social Behavior*, 49(3), 254-268.

- ROJIDO, E., CANO, E., & BORGES, D. (2023). *Tipología de los homicidios en Uruguay (2012-2022)*. Recuperado de https://ciesu.edu.uy/wp-content/uploads/2023/07/Diagnostico-de-los-homicidios-en-Uruguay_compressed.pdf
- RUIZ-TAGLE, J., & URRIA, I. (2022). Household overcrowding trajectories and mental well-being. *Social Science and Medicine*, 296, 114051.
- SAMPÓ, C., & TRONCOSO, V. (2023). Cocaine trafficking from non-traditional ports: examining the cases of Argentina, Chile and Uruguay. *Trends in Organized Crime*, 26(3), 235-257.
- SANJURJO, D. (2020). *Gun control policies in Latin America*. New York: Palgrave Macmillan.
- SERGI, A. (2019). Traditional organised crime on the move: exploring the globalisation of the Calabrian 'ndrangheta. In Talani, L. S. & Roccu, R. (Eds.). *The dark side of globalisation* (pp. 123-145). Cham: Palgrave Macmillan Cham
- SIDHU, A. (2024). A crackdown in the making: cartel violence in Costa Rica. *Geopolitical Monitor*. Retrieved from <https://www.geopoliticalmonitor.com/a-crackdown-in-the-making-cartel-violence-in-costa-rica/>
- SKAPERDAS, S. (2001). The political economy of organized crime: providing protection when the state does not. *Economics of Governance*, 2(3), 173-202.
- SKARBEEK, D. (2016). Covenants without the sword? Comparing prison self-governance globally. *American Political Science Review*, 110(4), 845-862.
- SMALL WARS JOURNAL – SMJ (2025). Mapping and profiling the most threatening criminal networks in Latin America and the Caribbean. Europe Latin America Programme of Assistance against Transnational Organised Crime. *SMJ*. Retrieved from <https://smallwarsjournal.com/2025/02/20/mapping-and-profiling-the-most-threatening-criminal-networks-in-latin-america-and-the-caribbean-el-paccto/>
- SNYDER, R., & DURÁN-MARTINEZ, A. (2009). Does illegality breed violence? Drug trafficking and state-sponsored protection rackets. *Crime, Law and Social Change*, 52(3), 253-273.

- SOARES, R., & NARITOMI, J. (2010). Understanding high crime rates in Latin America: the role of social and policy factors. In Di Tella, R., Edwards, S. & Schargrodsky, E. (Eds). *The economics of crime: lessons for and from Latin America*. (pp. 19-55). Massachusetts, MA: NBER.
- SOLARI, C. D., & MARE, R. D. (2012). Housing crowding effects on children's wellbeing. *Social Science Research*, 41(2), 464-476.
- STAKE, R. (1995). *Case study research*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- STOENNER, C. (2024). Costa Rica faces record-breaking levels of crime against tourists. *Cronkite News*. Retrieved from <https://cronkitenews.azpbs.org/2024/10/18/costa-rica-face-record-breaking-levels-crime-tourists/>
- SWISSINFO - SWI (2025). *Costa Rica cerró 2024 con 880 homicidios, la segunda cifra más alta de su historia*. Recuperado de <https://www.swissinfo.ch/spa/costa-rica-cerr%C3%B3-2024-con-880-homicidios,-la-segunda-cifra-m%C3%A1s-alta-de-su-historia/88672716>
- TENENBAUM EWIG, G. (2018). El mercado de las drogas ilegales en Uruguay. *Revista Mexicana De Sociología*, 80(4).
- THORNBERRY, T. P., et.al. (2014). Adolescent risk factors for child maltreatment. *Child Abuse and Neglect*, 38(4), 706-722.
- TSELONI, A. (2006). Multilevel modelling of the number of property crimes: household and area effects. *Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society)*, 169(2), 205-233.
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME - UNODC (2025). *Drug use prevalence*. Data UNODC. Retrieved from <https://dataunodc.un.org/dp-drug-use-prevalence>
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME – UNODC (2024). *Drug Trafficking & Cultivation*. Data UNODC. Retrieved from <https://dataunodc.un.org/dp-drug-seizures>
- UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME – UNODC (2023a). Local dynamics, global challenges. *Global report on Cocaine 2023* - Retrieved from https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/cocaine/Global_cocaine_report_2023.pdf

UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME – UNODC (2023b). The nexus between drugs and crimes that affect the environment and convergent crime in the Amazon Basin. *World Drug Report 2023*. Retrieved from https://www.unodc.org/res/WDR-2023/WDR23_B3_CH4_Amazon.pdf

URUGUAY. MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL - MIDES & DIVISIÓN DE ESTUDIOS SOCIALES Y TRABAJO DE CAMPO - DESYTC. (2018). Territorios educativos “Enseña Uruguay”: Montevideo y Maldonado. *Informe de caracterización*. Recuperado de https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/sites/ministerio-desarrollo-social/files/2019-06/respuesta-del-mides%5B1%5D_6.pdf

URUGUAY. MINISTERIO DEL INTERIOR -MIN (2024). *Informe sobre violencia y criminalidad en todo el país (2024)*. Recuperado de <https://www.gub.uy/ministerio-interior/comunicacion/publicaciones/informe-sobre-violencia-criminalidad-todo-pais-2024-2>

VANDERFORD, R. (2024). Ex-Vitol trader pleads guilty to additional bribery charges after conviction. *The Wall Street Journal*. Retrieved from <https://www.wsj.com/articles/ex-vitol-trader-pleads-guilty-to-additional-bribery-charges-after-conviction-878122ac?>

VON LAMPE, K. (2015). *Organized Crime: analyzing illegal activities, criminal structures, and extra-legal governance*. New York: SAGE Publications.

WALKER, R. (2022). Criminal violence and gang dynamics in Port-au-Prince, Haiti. *Caribbean Crime Journal*.

WALK FREE FOUNDATION. (2023). *Global Slavery Index / Regional Findings - The Americas*. Retrieved from <https://www.walkfree.org/global-slavery-index/findings/regional-findings/americas/>

WEINTRAUB, M., VARGAS, J. F., & FLORES, T. E. (2015). Vote choice and legacies of violence: evidence from the 2014 Colombian presidential elections. *Research & Politics*, 2(2).

WEISBURD, D. (2015). The law of crime concentration and the criminology of place. *Criminology*, 53(2), 133–157.

- WISER, D. (2024). Guayaquil to Guaya-Kill: Ecuador's descent from tourist haven to drug violence. *Lacuna Magazine*. Retrieved from <https://lacuna.org.uk/politics/guayaquil-to-guaya-kill-ecuadors-descent-from-tourist-haven-to-drug-violence/>
- WORLD ATLAS. (2024). *The most dangerous cities in the world*. Retrieved from <https://www.worldatlas.com/cities/the-most-dangerous-cities-in-the-world.html>
- WORLD PRISON BRIEF (s.d.). *Ecuador*. Retrieved from <https://www.prisonstudies.org/country/ecuador>
- YIN, R. K. (2018). *Case study research and applications: design and methods* (6th ed.). New York: Sage Publications.
- ZÚÑIGA LÓPEZ, R., & ORGANISMO DE INVESTIGACIÓN JUDICIAL - OIJ (2024). *Homicidios en Costa Rica 2023*. Recuperado de <https://www.documentcloud.org/documents/25230868-costa-rica-oij-1/>